

Nicaragua: una transición diferente*

Carlos M. Vilas

1. La teoría a la zaga de los hechos

Toda revolución social es, por supuesto, sólo igual a sí misma. Esa especificidad deriva tanto de las características propias de la estructura socioeconómica del país y del modo en que ésta se inserta en el sistema capitalista transnacional, como del perfil concreto de las fuerzas políticas que se enfrentan y de las correlaciones dominantes en el sistema internacional. Esto no significa que carezcan de valor los análisis comparativos de distintos procesos revolucionarios, que no sea factible o legítimo identificar elementos comunes o equivalentes en ellos, extraer enseñanzas de experiencias diferentes que, sin embargo, presentan esos elementos de comunidad o equivalencia, y cosas por el estilo. Todo esto es posible y tiene valor, con la condición de que se remonte a niveles bastante elevados de generalidad. Lo que en definitiva permite identificar, comprender y explicar una revolución, cada revolución, es su propia historia: los elementos únicos que se conjugan de manera especial en una cierta matriz de contradicciones al impulso de la acción de una determinada vanguardia. Tales elementos son, ciertamente, el modo específico de actualizarse tendencias generales y fuerzas objetivas. Pero esa actualización es el producto de múltiples y complejas determinaciones y encadenamientos, y de su expresión como estrategias políticas que, sin perjuicio de dicho encuadramiento general, dan a cada proceso revolucionario una fisonomía y una autonomía propias.

Nadie niega esto en términos verbales. Todo el mundo rechaza los intentos de "copiar modelos" o "imitar experiencias", y cualquier insinuación de este tipo es impugnada vivamente como un insulto o un ataque que niega la autenticidad del proceso y pretende adjudicarle subordinaciones extrañas.

No obstante, aún es fuerte en ciertos ámbitos intelectuales la tentación

* Trabajo presentado al III Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales efectuado en Managua, Nicaragua, los días 29, 30 y 31 de octubre de 1982.

de hacer generalizaciones en abstracto y la tendencia a encarar desde una perspectiva estrecha, atada a un cierto tipo de interpretación *ex post* de experiencias revolucionarias muy concretas, la interpretación de los procesos revolucionarios reales, sobre todo los que tienen lugar en las sociedades del llamado Tercer Mundo. A esa perspectiva se subordina, por lo tanto, la propia caracterización de dichos procesos, la evaluación de sus avances, el enjuiciamiento de sus “desviaciones”.

Por razones de índole diversa existe cierta tendencia a ver las revoluciones sociales del Tercer Mundo desde la óptica de sociedades relativamente industrializadas, con un avanzado proceso de diferenciación capitalista de la estructura de clases (burguesía y proletariado como clases demográfica y sociológicamente predominantes), una marcada urbanización de la economía y la política, una presencia imperialista fundamentalmente como potencia económica directa (en términos de inversiones productivas directas o de cartera), y una articulación a otras economías poco relevante (salvo en el aspecto recién señalado); las relaciones comerciales internacionales raramente merecieron, hasta bastante recientemente, una atención especial: las sociedades son pensadas implícita o explícitamente como economías cerradas.

El capitalismo se caracteriza así como una conjunción de industrialización, proletarianización y urbanización. Si estos elementos no existen en determinada magnitud o extensión —es decir si no son reconocidos a partir de ciertos parámetros ideológicos basados en casos muy específicos— no hay capitalismo, sino alguna forma de feudalismo o, en todo caso, de semi-feudalismo.* Y en consecuencia el socialismo no es posible: si “no es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino que su existencia social determina su conciencia” (Marx, “Prefacio” a *Contribución a la crítica de la economía política*); si “ningún orden social es nunca destruido antes que todas las fuerzas productivas que están implícitas en él se han desarrollado, y nuevas y superiores relaciones de producción nunca remplazan a las antiguas antes que hayan madurado, en el seno de la vieja sociedad, las condiciones materiales para su existencia” (*ibid.*); si, en consecuencia “la humanidad inevitablemente sólo se plantea las tareas que es capaz de resolver” y éstas “sólo surgen como problema cuando las condiciones materiales para su solución están ya presentes o en vías de gestación” (*ibid.*), el socialismo sólo puede tener viabilidad a partir de una sociedad capitalista. El texto de Marx que en el pensamiento y en la práctica política de hombres como Gramsci o Mariátegui fue entendido como un desafío a la praxis creativa y al coraje intelectual, y como herramienta de búsqueda, en la matriz de contradicciones de sus sociedades, de los elementos que impulsarían el avance de las luchas sociales y del proyecto revolucionario, fue manejado, otras veces, a lo sumo como una convocatoria a impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, para

* Es interesante cómo esta óptica estrecha para caracterizar el capitalismo va de la mano con una paralela generosidad y amplitud de miras que admite feudalismos de mil tipos, formas y niveles de desarrollo.

que, entonces sí, en una sociedad donde los campesinos y los artesanos estuvieran proletarizados, la sociedad urbanizada y la economía industrializada, el socialismo fuera posible.

Con un poco más de sofisticación, y algunas referencias bibliográficas, esta interpretación constituyó el fundamento teórico de la estrategia de algunas organizaciones políticas de América Latina: de lo que se trataba era de impulsar la revolución democraticoburguesa. Aparte de la manera poco feliz en que ésta era caracterizada, parece claro que no hay revolución democraticoburguesa sin burguesía interesada en ella. El tradicional y notorio recelo de la burguesía ante las organizaciones y reivindicaciones de las clases populares, trató de ser remediado supeditando las movilizaciones y las demandas populares al nivel de conciencia unitaria de la burguesía y al desenvolvimiento de sus contradicciones con "el feudalismo". La necesidad histórica de ciertas tareas se confundió con la necesidad histórica de ciertos agentes en el marco de las revoluciones burguesas de Europa y justificó en los hechos la renuncia a la conducción política del proceso y su abdicación en aras de alguna fracción de la burguesía. Por temor a que las fuerzas populares hicieran "de más" y espantaran a sus aliados, se arriesgó a que éstos hicieran, como en realidad hicieron, "de menos": hubo sin duda burguesía, pero no revolución, ni tampoco democracia. El materialismo fue sustituido, como método de análisis, por el objetivismo.*

Correlativamente, cualquier planteo político que fuera más allá de un horizonte tan reducido y que adoptara estrategias y métodos de lucha diferentes, se descalificó por aventurero, provocador, divisionista y, sobre todo, *pequeñoburgués*.

Algunos populistas rusos, con motivo de la traducción del primer volumen de *El capital*, plantearon por primera vez la posibilidad de una revolución socialista en sociedades atrasadas con fuertes componentes pre-capitalistas y un patrón de desarrollo diferente al de Europa occidental —especialmente al de Inglaterra. Ellos sostuvieron la especificidad de la vía de desarrollo de la revolución en su país y la posibilidad de pasar directamente de una sociedad semifeudal al socialismo, sin atravesar por los rigores y contradicciones del capitalismo. En esa época la cuestión tuvo un alcance fundamentalmente discursivo: los *narodniki* no eran ni con mucho una alternativa política y su preocupación principal era conocer la opinión de Marx acerca de la validez de su análisis del capitalismo para Rusia: del esquema de sucesión de modos de producción del Prefacio a la *Contribución a la crítica de la economía política*, y de la afirmación

* "El objetivista habla de la necesidad de un proceso histórico dado; el materialista hace constar con precisión que existen la formación social-económica dada y las relaciones antagónicas engendradas por ella. Al demostrar la necesidad de una serie dada de hechos, el objetivista siempre corre el riesgo de convertirse en un apolo-gista de los mismos; el materialista pone al desnudo las contradicciones de clase y, al proceder así, fija ya su posición. El objetivista habla de 'tendencias históricas invencibles'; el materialista habla de la clase que 'administra' el orden de cosas económico dado, creando determinadas formas de reacción de las otras clases." (Lenin, 1974:132-133.)

contenida en la Introducción al primer volumen de *El capital* de que las sociedades atrasadas habrían de seguir el camino trazado por el desarrollo de las sociedades avanzadas. Como es sabido, Marx apoyó la tesis populista, mientras que Engels se opuso terminantemente a ella (Marx, Danielson y Engels, 1981; Marx y Engels, 1980). La cuestión volvió a plantearse a fines del siglo XIX y principios del actual, coincidiendo con el ascenso político del populismo y con el desarrollo en su seno de tendencias liberales. Pero entonces Lenin demostró el carácter abstracto del debate. Para esa época el capitalismo se había consolidado como modo de producción dominante en Rusia y la cuestión del "atajo" carecía ya de interés político práctico (Lenin, 1974; Lenin, 1974a).

La discusión en torno a las tesis populistas, y en particular la polémica de Lenin, sirvió entre otras cosas para demostrar la especificidad del desarrollo del capitalismo en Rusia y de la revolución que habría de ponerle fin. Pero fue poco conocido hasta muy recientemente, y las posiciones de los *narodniki* alegremente descalificadas como algo carente de cualquier interés. No obstante, el hecho de que las respuestas ofrecidas por los populistas no hayan sido siempre las acertadas, no debería impedir el reconocimiento de que, en general, las preguntas que se formularon fueron las correctas, ni la comprobación de que muchas de esas preguntas sean retomadas por los movimientos de liberación nacional y por las revoluciones sociales del Tercer Mundo basta para tildar a unos y otras de populismo, utopismo o romanticismo.

En el último cuarto de siglo las revoluciones sociales han tenido lugar en Asia, América Latina y África: los eslabones débiles de la cadena imperialista. Si la caracterización del capitalismo y de las sociedades pre-revolucionarias a que nos hemos referido es cuestionable para las formaciones capitalistas desarrolladas, mucha menor relación tiene con las formaciones periféricas. Su estructura socioeconómica y el modo en que ella se articula con el sistema capitalista internacional, la fuerte dependencia del imperialismo y sus múltiples modalidades, y las fuerzas políticas que dinamizan el proyecto revolucionario, dan a las revoluciones sociales de estos países una fisonomía diferenciada y bien definida.

No es intención de las páginas siguientes llevar a cabo una caracterización de lo que a veces se denomina revoluciones del Tercer Mundo (Halliday y Molyneux, 1981). Su objetivo es a la vez más reducido y más amplio: más reducido, porque se tratará apenas de aportar elementos para la caracterización de la revolución popular sandinista —vale decir, solamente una de las revoluciones sociales del Tercer Mundo, la más reciente—; más amplio, porque no se trata simplemente de caracterizarla como una revolución del Tercer Mundo —algo obvio para todo el mundo— sino de destacar los aspectos de la revolución nicaragüense que le dan su especificidad y que, por lo tanto, la diferencian del conjunto al que sin embargo pertenece.

2. Un capitalismo distinto

Causas de índole diversa que no se analizarán aquí imprimieron al desarrollo de la formación social nicaragüense modalidades que la diferencian claramente no sólo de la caracterización señalada en el apartado anterior, sino también de otras formaciones latinoamericanas y del istmo centroamericano (Wheelock, 1976; Núñez, 1980). La manera en que el capitalismo se articula con modos y formas precedentes de producción, la resultante estructura de clases, el tipo de subordinación al imperialismo y al mercado internacional controlado por él, acuerdan a Nicaragua y al proceso de sus luchas populares una marcada especificidad. Modelaron la matriz de condiciones objetivas que enmarcó la lucha sandinista y se proyectaron con fuerte gravitación sobre la etapa de construcción de un nuevo orden social.

Rápidamente se enunciarán las más significativas para el objetivo de este documento.

a) *Centralidad de la pequeña y la mediana producción*

Un primer elemento que queremos señalar es el peso relativamente fuerte de la pequeña y mediana propiedad y producción, en términos sociológicos y económicos. El cuadro 1 muestra la distribución de la producción agropecuaria por estrato de superficie de finca, hacia finales de la década de 1970. Tanto en los rubros de exportación como en los orientados hacia el mercado interno, el pequeño y mediano campesinado representan alrededor de la mitad de la producción, y la burguesía mediana entre 20 y 40%; en conjunto generan entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{4}{5}$ del producto. En el algodón, el pequeño y mediano campesinado constituyen algo más del 80% de los productores con un tercio de la superficie en explotación, y la mediana burguesía algo más del 12%, con casi la mitad de la superficie cultivada.

En términos generales el campesinado nicaragüense representa 51% de la PEA rural —aproximadamente unas 200 000 personas. De acuerdo con estimaciones confiables, aproximadamente $\frac{1}{4}$ son campesinos medios y el resto minifundistas semiproletarios —es decir que deben incorporarse a relaciones salariales ya que su acceso a la tierra no genera un ingreso suficiente para su subsistencia. La burguesía mediana, por su parte, constituiría 96% del total de su propia clase (Deere y Marchetti, 1981:40-72).*

En el sector no agropecuario el panorama es menos nítido pero igualmente perceptible. El 54% de los establecimientos industriales emplea a menos de cinco personas cada uno y puede ser caracterizado como artesanal.

* Se considera campesino medio al que explota una finca de 10 a 49 manzanas de granos básicos, o de 5 a 10 manzanas de cultivos de exportación. Burguesía mediana es la que detenta entre 50 y 500 manzanas de granos básicos, o entre 10 y 500 de cultivos de exportación.

Cuadro 1

NICARAGUA: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. POR TAMAÑO DE FINCA

Superficie (Mz)*	Granos básicos ^a				Productos de exportación				
	% producción Maíz	Frijol	Sup. (Mz)*	Café ^a % Producción	Sup. (Mz)*	Ganadería ^a % Hato	Escala (Mz)*	Algodón ^b % productores Super (Mz)*	%
0 a 9	17	9	0 a 9	22	0 a 199	52	— de 5	21.5	1.4
10 a 49	34	37	10 a 49	30	200 a 999	29	5 a 9	22.5	3.0
50 a 199	32	37	50 a 199	18	1 000 y más	19	10 a 99	42.3	25.6
200 a 499	9	5	100 y más	30			100 a 499	12.2	46.6
500 y más	7	12					500 y más	1.5	23.4
TOTAL	100	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100.0	100.0

^a FUENTE: Estimaciones de CEFRA.

^b FUENTE: BGN.

* MZ = 1 manzana. 1MZ = 0.7 ha.

Una vez excluidos, el cuadro 2 presenta la situación existente en el sector propiamente industrial. Los establecimientos pequeños y medianos de acuerdo con su volumen de empleo (menos de 50 personas por establecimiento) constituyen 88% del total y generan 30% del empleo y 13.3% del valor agregado. Sin embargo, esta menor participación en el empleo y la producción (comparada con la situación señalada para el campo) no expresa forzosamente atraso tecnológico o ineficiencia productiva de los establecimientos pequeños y medianos respecto de los establecimientos grandes. Las diferencias de tamaño (en términos de empleo medio y de valor

Cuadro 2

NICARAGUA: ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL
POR TAMAÑO DE EMPLEO, 1980 (porcentaje)

<i>Tamaño^a</i>	<i>Establecimientos</i>	<i>Personal</i>	<i>Remuneraciones</i>	<i>Valor agregado</i>
5 a 9	59.3	13.0	7.4	3.9
10 a 29	24.2	11.6	10.0	5.8
30 a 49	4.7	5.7	5.7	3.6
50 a 99	5.6	12.5	13.1	24.2
100 y más	6.2	57.2	63.6	62.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
	(1 412)	(45 040)	(1 256.8)*	(3 941.8)*

^a Estrato de personal ocupado.

* Millones de córdobas.

FUENTE: Elaboración de CETRA sobre la base de datos de INEC.

agregado por establecimiento) no tienen como correlato diferencias equivalentes en materia de productividad, de composición orgánica del capital ni de explotación capitalista de la fuerza de trabajo. En otras palabras, los establecimientos industriales más grandes no son necesaria ni proporcionalmente más productivos ni eficientes —en términos capitalistas— que los establecimientos de menor tamaño.*

* La dispersión del tamaño de los establecimientos es el doble que la de la productividad: 1.256 si se toma como indicador de tamaño la relación personal/establecimiento, y 1.235 si se toma la relación valor agregado/establecimiento, frente a una dispersión de la productividad (valor agregado/personal) de .652. La dispersión de la composición orgánica del capital sería de .763, y la de la tasa de plusvalía 1.011. Fuente. Estimaciones de CETRA sobre cifras de INEC.

El perfil de la distribución del ingreso ofrece una aproximación complementaria a lo que se viene señalando; es sabido que la estructura de la distribución está determinada por la estructura de la producción “y es como su reverso; más aún, la distribución es ella misma un producto de las relaciones de producción” (Marx, 1968:44). El cuadro 3 permite una rápida comparación de la distribución del ingreso existente en Nicaragua poco antes del triunfo de la revolución popular sandinista con las

Cuadro 3

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CENTROAMÉRICA Y OTROS PAÍSES

Grupo perceptor	Nicaragua ^a	Costa Rica ^b	El Salvador ^b	Honduras ^b	Guatemala ^b	Rep. Dominicana ^c	Argentina ^d
5% superior	28	22.8	15.4	21.8	35.0	38	21.4
15% medio superior	32	27.9	49.4	29.5	23.9	15	26.0
30% medio	25	28.5	22.8	25.2	23.8	27	29.4
50% más bajo	15	20.8	12.4	23.5	17.3	20	23.2
TOTAL	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0

^a 1977. FUENTE: CEPAL, *Nicaragua: antecedentes económicos del proceso revolucionario*, México, 1979.

^b FUENTE: G. Rosenthal, “Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la posguerra”, en *Centroamérica: Crisis y política internacional*, México, Siglo XXI, 1982, 19:38, cuadro 8. Costa Rica: 1971; El Salvador: 1974; Honduras: 1976-1979; Guatemala: 1976.

^c 1959. FUENTE: C. M. Vilas, “Pouvoir politique et domination sociale en République Dominicaine”, *Nouvelle Optique*, 9 (1973), 33:88. La información corresponde a la ciudad de Santo Domingo.

^d 1970: C. M. Vilas, *La dominación imperialista en Argentina*, Buenos Aires, EUDEBA, 1974, p. 110. La información corresponde al área metropolitana.

de los demás países del istmo y las de dos países de afuera de él: uno con un patrón de desarrollo capitalista próximo en varios aspectos al de Nicaragua —la República Dominicana—, y otro que, al contrario, ofrecía en la época en que se tomó la información un perfil de desarrollo bastante distinto —Argentina. También aquí es posible advertir la magnitud relativamente amplia de la participación de los sectores intermedios y medio-superiores. Si se exceptúa El Salvador, Nicaragua es el país donde capturan mayor proporción del ingreso total. Pero debe señalarse asimismo que la

polarización de los grupos perceptores extremos en Nicaragua es la mayor de los siete países, con excepción de Guatemala.

La fuerte participación de la pequeña y la mediana propiedad y producción tiene como complemento una participación relativamente reducida de la gran burguesía. Ya se ha visto no obstante que el panorama no es homogéneo y que existe un corte bastante marcado entre el sector agropecuario y el industrial. En aquél la burguesía representa efectivamente una proporción pequeña de la producción, mientras que en la industria genera dos tercios del empleo y más de 80% del valor agregado, configurando el perfil de una concentración oligopólica del capital.

Ahora bien, si la participación de la gran burguesía nicaragüense no fue tan grande en lo que toca a la producción agropecuaria, otra era la situación en lo referente a las actividades comerciales y al capital financiero. Es precisamente aquí donde se encontraba el centro del poder económico de la gran burguesía local y el ámbito de su articulación fundamental con el imperialismo y con el Estado. Fue el control del capital financiero y comercial en su sentido más amplio —bancos y compañías financieras, operaciones inmobiliarias, seguros y reaseguros, financiamiento de actividades productivas, exportación, etcétera—, más que una participación cuantitativamente significativa en la propiedad de los medios de producción, lo que puso en manos de esa fracción de clase el manejo de la economía del país y la función de mediación dependiente respecto de los intereses y la presencia imperialista.

A diferencia de lo que se observa en otras formaciones del continente, en Nicaragua la ausencia de una articulación con el mercado internacional a través de un enclave extranjero —cuestión que se comentará más adelante— no significó que esa vinculación fuera canalizada por una gran burguesía local propietaria en gran escala de los medios y condiciones de producción en el sector exportador. Pero la participación en el sector de exportación de las fracciones pequeñas y medianas del capital productivo nacional no significó en definitiva un paralelo control de la producción, en la medida que esas fracciones estaban subordinadas a través de los precios, el financiamiento, etcétera, al capital comercial y financiero de la gran burguesía local y del exterior, y a las agencias del Estado dictatorial. De tal manera, el capital productivo de estos sectores pequeños y medianos de la burguesía y el campesinado estaban menos subordinados económicamente al capital productivo de la gran burguesía que al capital financiero y comercial local y extranjero.

Todo esto se refiere solamente a un aspecto de la cuestión. La participación en la propiedad de los medios de producción y de cambio, la dimensión del capital que se controla, etcétera, no agotan la caracterización de una clase en términos del tipo de relaciones de producción en las que se inserta, ni la dimensión material de esas relaciones de producción basta para caracterizar a la clase: la constitución de una clase y de sus fracciones, como sujetos de acción histórica, se completa y adquiere plenitud en el terreno políticoideológico. Es evidente sin embargo que una presenta-

ción de las cuestiones relacionadas con estos aspectos del problema extendería mucho la exposición. Nos limitaremos por lo tanto a plantear muy escuetamente algunos de esos puntos.

En primer lugar, se ha señalado el desarrollo relativamente temprano y rápido —en comparación con economías de mayor nivel de desarrollo capitalista— de un proceso de progresiva integración y fusión del capital comercial-financiero con el capital agroindustrial y en general productivo, configurándose como resultado un conjunto pequeño pero poderoso de grupos financieros cuyas características son bien conocidas. La velocidad de este movimiento del capital, su impacto sobre la estructura de producción y de circulación, la participación directa del capital imperialista, la participación del Estado dictatorial, y el contraste con el *ethos* económico de la gran burguesía tradicional y de las fracciones medias y pequeñas del capital, influyeron para que a veces se sobredimensionara la magnitud del control de la economía alcanzado por estas fracciones dinámicas del gran capital. No obstante, es indudable que a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 estos grupos alcanzaron una participación importante en la gestión del capitalismo nicaragüense, particularmente en sus sectores más dinámicos; constituyeron la contraparte local de las nuevas modalidades del proceso de valorización del capital en escala trasnacional y definieron modalidades nuevas y más eficientes de subordinación de las fracciones menores del capital local y de explotación de la fuerza de trabajo.

En segundo lugar, las orientaciones económicas de buena parte de la gran burguesía —especialmente terrateniente— parecen no haber estado totalmente carentes de elementos y componentes que no son propiamente capitalistas. La posesión de vastas extensiones de tierra fue así, en muchos casos, más la disposición de un bien de renta —o incluso de atesoramiento— que de un medio de producción. O bien su utilización productiva demandaba un capital de trabajo que excedía las posibilidades propias de esa fracción, poniéndola en la alternativa de reproducir esos patrones de comportamiento no empresario o aceptar las condiciones del capital financiero y comercial de los nuevos grupos financieros. Como sea, el hecho es que la reducida participación de esta gran burguesía agraria en la producción, señalada en el cuadro 1, contrasta marcadamente con la elevada concentración de tierra en sus manos: en vísperas del triunfo revolucionario controlaba 41.2% de la superficie, con sólo 1.4% de las explotaciones. Esta relación tan agudamente polarizada entre tenencia y producción indica la existencia de un comportamiento de clase con fuertes elementos de ociosidad y ausentismo. El comportamiento político de estos grupos expresó con bastante fidelidad las determinaciones de esa peculiar inserción en la estructura material de la sociedad. Su progresiva subordinación respecto del polo dinámico hegemónico por los nuevos grupos financieros y el Estado somocista, la falta de un proyecto alternativo de dominación y su debilidad como fracción de clase desde una perspectiva propiamente capitalista condicionaron su participación en el terreno político a un papel estrictamente subordinado. Carentes de fuerza, y posiblemente

de interés, para aspirar a un control efectivo del poder político nacional —lo cual habría implicado un enfrentamiento abierto y directo con la dictadura—, se limitaron en general a presionar desde afuera del Estado, para luego negociar y transar alguna forma de inserción en los ámbitos marginales de la institucionalidad del Estado dictatorial.

La fracción de productores agrícolas que se halla debajo de esa gran burguesía terrateniente y encima del minifundio presenta, en cambio, un perfil opuesto. Clase —o fracciones de clase, como se prefiera— de gente hecha por sí misma, su relación con la tierra se da en términos eminentemente productivos. En el caso de los productores propietarios se trata de una relación de propiedad económica y no simplemente jurídica; es decir, capacidad efectiva de destinar los medios de producción a aplicaciones determinadas y de organizar y dirigir el proceso productivo —aunque su subordinación al gran capital comercial, financiero y agroindustrial en términos de precios, habilitaciones, insumos, etcétera, relativizaba bastante esa capacidad real de dirección. El empleo de fuerza de trabajo asalariada ajena a la unidad familiar es reducido y sobre todo estacional en el caso de los cultivos de exportación de la burguesía mediana. Estos rasgos, más la atención directa de la marcha de la producción, e incluso su incorporación a las tareas productivas en los estratos inferiores de la fracción, se conjugan con la residencia en la explotación o en núcleos urbanos de la zona y con un estilo de vida no consumista y en general modesto. El excedente que finalmente quedaba en manos del productor se destinaba fundamentalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas y a revertirse de manera productiva en la finca.

Estos rasgos generales de un sector social tan heterogéneo en cuanto a la magnitud de la explotación económica (cuadro 1) abarcan no sólo al campesinado sino también a amplias fracciones de la burguesía mediana, que en este sentido, y sin perjuicio de las diferencias en las dimensiones de la tenencia de tierra y en el volumen de actividad, se aproximan mucho más a los grupos de dimensiones menores que a la gran burguesía terrateniente.

Estos elementos objetivos en la configuración de los pequeños y medianos productores rurales favorecieron el desarrollo de orientaciones democráticas, reformistas e incluso revolucionarias. Al no descansar su actividad productiva en la explotación de fuerza de trabajo —o al hacerlo de manera reducida o estacional—, pudieron sentir y visualizar con más claridad las diversas modalidades de opresión política y de subordinación a los grandes terratenientes y al gran capital, sin tener como retaguardia la posibilidad de trasladar hacia el asalariado por lo menos una parte del costo de una y otra. Al mismo tiempo, la heterogeneidad de estas fracciones en cuanto a su acceso a la tierra y a las condiciones de organización de la producción, generaron una paralela heterogeneidad y complejidad en las demandas formuladas; la presión por la tierra se conjuga con la reivindicación de condiciones empresariales de explotación: crédito, insumos, asistencia técnica, condiciones favorables de comercialización, y otras.

La percepción directa y frecuentemente brutal de sus contradicciones con las expresiones locales de la dictadura (jueces de mesta, mandos locales de la Guardia Nacional, favoritos o allegados al régimen...) y con la política del Estado somocista, con el capital financiero, comercial y agro-industrial de los grupos financieros, y con la renta terrateniente, motorizaron su antagonismo hacia el orden económico y político vigente, crearon condiciones propicias para la política de acumulación de fuerzas del FSLN y para la adhesión de amplios sectores de estos productores rurales —incluso en sus fracciones medias y no sólo en los minifundistas o los sin tierra— a la lucha sandinista.

También aquí la situación fue distinta en el sector urbano. La gran burguesía da cuenta aquí de una proporción importante de la producción y del empleo (el cuadro 2 ofrece una perspectiva de esto con referencia al sector industrial). Ya se señaló sin embargo que la eficiencia capitalista de esta fracción no debe ser exagerada, por más que contraste nítidamente con las orientaciones y prácticas de la burguesía terrateniente. La pujanza que alcanzaron en su actividad se explica no sólo por la eficiencia productiva o una acertada gestión empresarial, sino también por su habilidad para relacionarse con el Estado dictatorial y con las nuevas modalidades de penetración imperialista en la economía nacional. La política, como práctica de la organización y conducción de la sociedad —y por lo tanto como proyecto nacional— no parece haber formado parte del orbe de preocupaciones de estas fracciones sino muy recientemente, cuando el avance de la lucha sandinista era ya irrefrenable. Hasta entonces estos grupos se mantuvieron más bien concentrados en su propia práctica económica, presionando al Estado desde afuera y en función de medidas y reivindicaciones fundamentalmente categoriales. La política se diluía en un sistema de presiones específicas y demandas concretas orientadas a la valorización de su capital. Se reconocía por lo tanto la legitimidad del orden político de la dictadura, y sólo cuando la revolución se hizo evidente como posibilidad real e inmediata, las contradicciones categoriales con la camarilla somocista comenzaron a procesarse en términos de diferencias políticas (Diederich, 1981).

El pequeño y mediano capital productivo urbano, por su parte, tiene una participación relativamente reducida en la producción y en el empleo, pero la base de la valorización de su capital y de su reproducción como clase es la misma que la del gran capital: la explotación de la fuerza de trabajo. Hay aquí, por lo tanto, la articulación de dos contradicciones. Una, en el seno de la clase, con el gran capital en la medida en que éste expropia parte del excedente de las fracciones menores a través de mecanismos como la generación de rentas monopólicas, las diferencias de productividad, el tipo de interés del capital de préstamo, etcétera; y otra contradicción, ésta sí antagonica, con la clase obrera y con sus expresiones organizativas, que en caso de éxito se traducen en una reducción adicional de la cuota de ganancia.

Ya se ha dicho, además, que estas fracciones menores del capital no son mucho más ineficientes que la gran burguesía, y aunque la tasa de plus-

valía que extraen de su fuerza de trabajo es más baja que la que extrae el gran capital —denotando en algunos casos elementos no propiamente capitalistas de gestión de la fuerza de trabajo—, esa diferencia es en general menor que las diferencias de tamaño de los establecimientos productivos.*

La mayor presión sobre la fuerza de trabajo —en términos económicos y políticos— fue la respuesta adaptativa a las contradicciones emanadas del proceso productivo en el seno de la clase; la política laboral del Estado somocista y sus aparatos represivos estuvieron siempre al servicio de las demandas patronales de “mano firme” y disciplina obrera. En esto, la unidad de la clase demostró ser muy sólida. En consecuencia, el desarrollo de posiciones democráticas, antimperialistas y revolucionarias tuvo lugar en las ciudades, fundamentalmente en el amplio espacio del artesanado, el pequeño comercio y, en general, en el ámbito de la pequeña o mediana propiedad personal o familiar.

b) Un proletariado cuantitativamente reducido y con un proceso no concluido de separación respecto de los medios de producción y reproducción

De acuerdo con estimaciones, el proletariado nicaragüense habría representado, hacia fines de la década de 1970, alrededor de 14% de la PEA (unas 116 000 personas aproximadamente). El proletariado urbano sumaría unas 83 000 personas y la clase obrera rural 33 000.

Estas cifras, que indican el peso numérico exiguo del proletariado en la estructura de clases, se refieren únicamente a los obreros permanentes. En el agro existe un subproletariado de obreros estacionales y sin tierra estimado en un tercio de la PEA rural (aproximadamente 170 000 personas) (Deere y Marchetti, 1981:40-72). De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Planificación, el llamado sector informal, constituido por estratos de servicios y de comercio, empleados por cuenta propia, algunos trabajadores industriales a destajo y artesanías, etcétera, absorbe más de un tercio de la fuerza de trabajo no agropecuaria (Nicaragua, Ministerio de Planificación, sf: 93).

En 1980 el sector industrial y de la construcción empleaba a menos de 30% de los asalariados urbanos; el sector servicios (sin comercio) a 42%, y el comercio a 24%. La mayor presencia de asalariados se verificó en la ciudad de Managua.** La mitad de la fuerza de trabajo urbana está constituida por trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares

* De acuerdo con estimaciones del CETRA la dispersión de la tasa de plusvalía en el sector industrial sería 22% menor que la del tamaño de los establecimientos (medido por el valor agregado respectivo) y 28% menor si se toma como indicador de tamaño el volumen de empleo.

** Cfr. INEC, *Encuesta de hogares* (agosto-septiembre de 1980). Sólo se toma en consideración en el texto al sector privado; por supuesto, el concepto de asalariado es más amplio que el de obrero. Las cifras, por lo tanto, tienen un valor ilustrativo.

no remunerados (40% y 10% respectivamente), pero en el comercio la proporción sube a dos tercios: 50% los trabajadores por cuenta propia y 17% los trabajadores familiares sin remuneración.*

El 70% de los asalariados de la industria trabaja en establecimientos grandes (de más de 50 puestos de trabajo) y genera 87% del valor agregado respectivo; 57% lo hace en establecimientos de más de 100 empleos (6.2%), con 62.5% del valor agregado total (cuadro 2). Aquí, el proceso de trabajo es más complejo, presenta mayores requerimientos de calificación laboral, etcétera.

Existe por lo tanto un proletariado reducido, concentrado en relativamente pocos establecimientos pero que genera una proporción muy alta del producto, junto a muy amplios sectores de asalariados no plenamente separados de un fondo de reproducción personal o familiar y de algunos medios de producción: artesanos, trabajadores por cuenta propia, etcétera, que conforman un vasto y multifacético "sector informal". Esta diferenciación en las condiciones materiales de trabajo y de vida —pero no necesariamente en los niveles de ingreso— alcanzó manifestaciones en el terreno politicoorganizativo y reivindicativo. Las organizaciones sindicales que lograron cobrar existencia durante la dictadura somocista fueron en general débiles, pequeñas y estructuradas por lugar de trabajo. Las pocas excepciones —vale decir organizaciones de afiliación numerosa, reclutada por rama de actividad— se hallaban fundamentalmente fuera del sector manufacturero: trabajadores de la construcción (con un fuerte componente artesanal o "de oficio"), de los servicios de salud, maestros, etcétera. Concentrada su atención casi exclusivamente en las demandas reivindicativas, tendieron a funcionar en un esquema de factores de presión sobre un Estado al que en los hechos no se pretendía mucho más que arrancarle mejoras categoriales, sin reconocer la legitimidad y la necesidad de formas no institucionales de lucha e incluso oponiéndose al activismo y la militancia, dentro de esas organizaciones y de los centros de trabajo, de cuadros revolucionarios (Arce, 1980).

La práctica de estas conducciones sindicales habría de contrastar con el activismo insurreccional masivo de los sectores urbanos de la pequeña propiedad (artesanado, pequeño comercio, etcétera), la juventud, y los amplios sectores de la población urbana que se identifican más por su emplazamiento en el ámbito de la reproducción que en el de la producción (habitantes de barrios populares, amas de casa, pobladores de terrenos invadidos, etcétera) o por su inserción en prácticas y aparatos ideológicos: estudiantado, profesionales, maestros, grupos religiosos, y similares.

El reclutamiento revolucionario en el ámbito estrictamente proletario tuvo que desarrollarse luchando a un mismo tiempo contra la represión patronal y estatal, por un lado, y las resistencias de las direcciones sindicales recluidas en el reivindicacionismo, y en un terreno donde la práctica

* Según estimaciones del CETRA, las mujeres constituyen el 57% de los trabajadores por cuenta propia, y 72.5% de los trabajadores por cuenta propia en el sector comercial.

de la lucha reivindicativa podía ostentar una existencia si no eficaz, sin duda ardua y relativamente prolongada. En el ámbito de la tercera fuerza (Núñez, 1980:141-157), la resistencia fue en cambio mínima y la competencia inexistente. El terreno para la organización de los barrios, de las mujeres, de los estudiantes, etcétera, fue producido exclusivamente por la lucha revolucionaria del FSLN, similar al espacio abierto por esa lucha para la organización del proletariado agrícola y de los campesinos y productores medios del campo.

Sin embargo, no debería acordarse a esta contradicción en el seno del campo obrero y popular más alcance que el que efectivamente tuvo. Ninguna clase obrera vive sus condiciones materiales e ideológicas de existencia en abstracto o separada del resto del campo popular, y menos aún en una formación social como la nicaragüense, donde el proceso de diferenciación objetiva del proletariado respecto del conjunto de la fuerza de trabajo y del acceso directo a medios de producción y de reproducción es aún reducido. Las categorías de asalariado, obrero propiamente tal, trabajador por cuenta propia, destajista, etcétera, se combinan de mil formas en el seno de cada familia e incluso se suceden o concurren en una misma persona.

Por otra parte, el bajo nivel general de ingresos de las clases populares, los elevados índices de enfermedad y desnutrición, de desempleo y subempleo, la represión que se ejercía brutalmente sobre cualquier expresión de protesta y de lucha, actuaron como contratendencias frente a los elementos objetivos y politicoideológicos de diferenciación. El cuadro 4 ofrece una aproximación a esta situación: la distribución y el nivel medio de los ingresos de los grupos populares urbanos, a mediados de la década pasada. Se considera la distribución en tres modalidades de ingreso —diario, semanal y quincenal— que en conjunto concentraban a más de 80% de los casos y donde obreros, artesanos y operarios representaban en promedio 52% del total de perceptores: 56% en los ingresos diarios, 60% de los perceptores de ingresos semanales y 21% de los perceptores de ingresos quincenales.* Los resultados apuntan todos en la misma dirección. La mitad de los perceptores de ingresos diarios se concentraba en menos de \$25 al día; en el grupo de ingresos percibidos semanalmente, dos tercios recibía menos de \$200 por semana, y en el grupo de ingresos quincenales casi la mitad percibía menos de \$500 por quincena.

c) *Débil presencia económica directa del imperialismo*

El capital extranjero no parece haber alcanzado una gravitación determinante en la estructura económica de Nicaragua. La propiedad de los medios de producción estuvo fundamentalmente en manos de capitalistas y productores locales. Las inversiones extranjeras en sectores como el ba-

* El modo en que la información fue recogida no permite separar a los obreros y operarios de los artesanos. En la categoría de ingresos mensuales estos tres grupos representaban solamente 18% de los perceptores.

Cuadro 4

NICARAGUA: ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LOS GRUPOS POPULARES URBANOS
(Mediados de la década de 1970)

<i>Escala de ingresos^a</i>	<i>% de los perceptores^b</i>	
<i>Diario</i>	100.0	(6 632)
Menos de 10	4.1	
10 a menos de 25	47.0	
25 a menos de 50	31.3	
50 a menos de 100	10.3	
100 y más	4.3	
<i>Semanal</i>	100.0	(38 150)
Menos de 50	1.8	
50 a menos de 100	9.3	
100 a menos de 200	52.3	
200 a menos de 500	34.3	
500 y más	2.3	
<i>Quincenal</i>	100.0	(30 786)
Menos de 250	10.0	
250 a menos de 500	37.3	
500 a menos de 750	25.6	
750 a menos de 1 500	20.0	
1 500 y más	7.1	
<i>Mensual</i>		(18 069)

^a En córdobas.

^b Comprende a las personas mayores de 10 años, de ambos sexos, ocupadas en las categorías artesanos y operarios, obreros y jornaleros, conductores de transporte, vendedores del comercio, trabajadores en servicios personales y comunales, empleados de oficina.

FUENTE: Elaboración de CETRA sobre la base de datos de OEDEC.

nanero, el maderero y la minería fueron de un monto global relativamente reducido. El enclave de plantación —al estilo de Honduras o incluso de Costa Rica y Guatemala— no existió en Nicaragua, y la participación de esos rubros en la actividad económica del país y en su articulación en el sistema internacional a través de las exportaciones venía en retroceso desde varias décadas antes del triunfo revolucionario.

Con el auge algodonerero y la vigencia del esquema de integración regional, las inversiones directas extranjeras, estadounidenses sobre todo, incre-

mentaron su valor, pero siempre dentro de una escala reducida. Entre 1959 y 1969 pasaron de \$18.7 millones a \$76.3, y se orientaron de manera creciente hacia la industria manufacturera. La inversión extranjera directa en la industria manufacturera pasó de 27.8% del total en 1959 a 54.4% en 1969 (de \$5.3 millones a 41 millones) (De Franco y Chamorro, 1979:94-133). De todas maneras, en 1975 Nicaragua recibía sólo 9.4% de toda la inversión directa de los países del CAD-OCDE radicada en el istmo, y hacia 1977-1978 sólo 15% de los 614 establecimientos de empresas trasnacionales con actividad en Centroamérica estaba en Nicaragua (Castillo, 1980: 186 y 172).

Más que en términos económicos directos, por lo tanto, la gravitación del imperialismo, intensa como fue, se manifestó sobre todo como potencia politicomilitar. Bajo la dictadura somocista, Nicaragua fue para Estados Unidos más un voto en los organismos internacionales y un aliado político seguro para su control de la región, o territorio de reserva para un eventual segundo canal interoceánico, que un emplazamiento significativo de inversiones productivas. Fue un imperialismo de embajadores y generales antes que de industriales y banqueros.

La fuerte dependencia externa de la economía nicaragüense se consiguió con relativamente poco capital foráneo y se dio más en el plano de la circulación y la realización del capital, que en el de la producción. La especialización exportadora, la reducida incidencia en los mercados internacionales, la incapacidad para fijar precios, la extrema apertura externa de la economía, son otros tantos canales de subordinación a un sistema económico internacional diseñado y controlado por el imperialismo. El comportamiento político genuflexo de la dictadura y de la gran burguesía reforzó la dinámica objetiva del diseño imperialista, reproduciéndola como estrategia política de valorización de su propio capital.

El cuadro 5 presenta algunos elementos de esta situación a lo largo de todo el decenio pasado: una apertura externa que se amplía de manera creciente, un coeficiente de importaciones también con tendencia al alza, y saldos comerciales y del balance de pagos sistemáticamente negativos que trataron de ser paliados con el recurso de un endeudamiento externo cada vez mayor, que difícilmente habría sido posible sin la cooperación estadounidense y la benevolencia de los organismos financieros internacionales.

d) *Una crisis política más que económica*

Una lectura simplista de Marx lleva a ver en la base de toda revolución social una crisis económica y, a la inversa, a ver en la existencia de una revolución social la mejor prueba de la crisis económica del viejo régimen. Por supuesto, la gestación y el desarrollo de una revolución popular requieren la existencia de condiciones objetivas, pero éstas no se reducen a la cuestión de la crisis económica. En el fondo de este error hay una re-

Cuadro 5

NICARAGUA: VULNERABILIDAD EXTERNA DE LA ECONOMÍA, 1970-1980

Años	Apertura externa ¹ %	Coefficiente de importaciones ² %	Saldo de la balanza comercial (\$ millones) ³	Saldo de la cuenta corriente (\$ millones) ⁴	Coefficiente de endeudamiento ⁵ (%)
1970	48.6	25.6	- 20.1	- 38.1	22.5
1971	48.1	25.4	- 23.2	- 42.8	25.8
1972	53.1	24.8	- 30.9	+ 21.7	29.0
1973	55.3	29.9	- 49.0	- 65.1	31.7
1974	61.9	36.9	-180.7	-256.7	33.1
1975	56.1	32.5	-141.7	-184.1	40.5
1976	58.1	28.8	+ 9.8	- 38.7	36.8
1977	66.3	36.1	-125.1	-182.0	31.5
1978	61.6	29.5	+ 52.0	- 25.0	37.3
1979	64.3	25.0	+206.4	+180.2	69.9
1980	62.6	41.6	-421.0	-448.0	73.4

¹ $\frac{X+M}{PIB}$ FUENTE: Elaboración de cifras de INEC.

² $\frac{M}{PIB}$ FUENTE: INEC y CEPAL.

³ FUENTE: INEC y CEPAL.

⁴ FUENTE: CEPAL.

⁵ Saldo de la deuda/PIB. FUENTE: INEC.

ducción economicista de la tesis marxista del papel determinante de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la estructura existente de relaciones de producción, y una identificación de dicha contradicción con "la crisis".*

Es evidente sin embargo, que ni toda crisis del capitalismo es el producto de esa contradicción, ni la crisis económica significa mucho en sí misma si no existen las condiciones políticoideológicas y organizativas para hacer de ella un factor que impulse la revolución. Sin esas condiciones —que no se generan espontánea o automáticamente por la dinámica de lo económico— la crisis puede ser reabsorbida por las clases dominantes y convertirse en el punto de partida de una nueva etapa —más incrementada incluso— de la explotación social y la opresión política de las masas.

* "Tenemos que cuidarnos del palabrerío pseudomarxista, que suele dar apariencia de marxismo, pero que en el fondo es sólo materialismo económico, una falsificación del marxismo. El materialismo económico únicamente le concede importancia a los hechos económicos, como generadores de los hechos políticos" (Fonseca, 1981: 308-309; Gramsci, 1977:35ss).

A partir del enfoque economicista se ha afirmado que el derrocamiento de la dictadura somocista y la victoria sandinista fueron el producto de la crisis del capitalismo dependiente en Nicaragua y de su articulación con la crisis mundial del sistema. El masivo involucramiento del pueblo e incluso de fracciones medias de la burguesía en la lucha sandinista, el resquebrajamiento y derrumbe del somocismo, serían efectos del desarrollo de una crisis profunda de la economía.

Aparte de que el concepto mismo de crisis económica no aparece claro ni explícito en estas afirmaciones —si se dejan de lado las referencias vagas a la crisis permanente del capitalismo dependiente, a la crisis mundial o a la crisis general del capitalismo— la hipótesis misma no aparece suficientemente avalada por el desenvolvimiento real de la economía nacional.

En el cuadro 6 se presenta la evolución del PIB y de dos de sus sectores productivos durante todo el período anterior al triunfo revolucionario. De acuerdo con los datos, la economía nicaragüense creció. No lo hizo a tasas espectaculares y los ritmos fueron desiguales y discontinuos, expresión de una estructura desarticulada y fuertemente subordinada al mercado mun-

Cuadro 6

NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL PIB, 1970-1980

Años	Millones de córdobas de 1980	Tasa de crecimiento (%)		
		PIB global	PIB agropecuario	PIB industrial
1970	20 098.3	—	—	—
1971	21 088.9	4.9	8.0	5.0
1972	21 759.9	3.1	0.9	5.2
1973	22 867.7	5.1	5.8	4.0
1974	25 773.2	12.7	8.7	12.7
1975	26 339.4	2.2	6.5	3.2
1976	27 667.9	5.0	1.7	4.5
1977	27 920.0	0.9	3.8	10.3
1978	25 977.5	- 6.9	8.7	2.4
1979 ^a	19 406.7	-25.3	-13.3	-30.6
1980 ^b	21 339.3	9.9	- 8.3	16.5
Promedio 1971-1978		3.3	5.5	5.9

^a Preliminar.

^b Estimación.

FUENTE: World Bank, *Nicaragua: The Challenge of Reconstruction*, Washington, 1981.

dial. De todos modos la economía creció, sobre todo en los sectores de la producción agropecuaria e industrial.

Durante la segunda parte del período se advierte, sin embargo, una fuerte desaceleración del crecimiento. Si la tasa media global fue de 6.4% anual en 1971-1974, en 1975-1978 se redujo a 0.3% y este último año el producto cayó en valores absolutos. Pero en los sectores productivos la desaceleración fue mucho menos notoria: de 5.8 a 5.3 en el agropecuario, y de 6.7 a 5.1 en la industria manufacturera, para ambos subperíodos respectivamente.

La tendencia decreciente en el dinamismo de la economía nacional es de largo plazo. Entre 1960 y 1965 el PIB creció a una tasa de 10.2%, mientras el conjunto del istmo lo hizo en 6%; en 1965-1970 el PIB de Nicaragua creció al 4.2% promedio anual y el regional en 5.4%, mientras que en 1970-1978 las tasas medias anuales fueron 4% y 5% respectivamente (Rosenthal, 1982: 19-38, cuadro 8). Pero es evidente que desaceleración del crecimiento y tendencia al estancamiento son una cosa, y estancamiento y recesión otra. Si por crisis de la economía se entiende estancamiento y recesión, no había en Nicaragua crisis económica.

El cuadro 7 muestra la marcha de la inversión. El comportamiento de esta variable no parece haber experimentado alteraciones relevantes durante los años anteriores a la insurrección final y la caída de la dictadura. El

Cuadro 7

NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES, 1970-1980
(Millones de córdobas de 1980)

Años	<i>Inversión bruta fija</i>	<i>Inversión privada</i>	<i>Coefficiente de inversiones*</i>
1970	3 268.0	2 448.6	17.5
1971	3 373.6	2 295.4	17.2
1972	2 997.8	1 946.8	12.5
1973	4 109.6	2 822.8	20.6
1974	5 023.9	3 497.0	23.9
1975	4 561.1	3 041.8	16.4
1976	4 820.4	2 884.7	16.3
1977	6 184.0	3 138.9	25.1
1978	3 436.4	1 895.9	11.0
1979 ^a	1 404.8	726.7	—
1980 ^b	3 280.0	676.0	20.1

* $\frac{\text{Inversión interna bruta}}{\text{PBI}} \times 100.$

^a Preliminar.

^b Estimado.

FUENTE: World Bank, *Nicaragua: The Challenge of Reconstruction*, Washington, 1981.

coeficiente de inversiones se mantuvo en general estable salvo en 1978; aun así el corte relativo que se indicó respecto del crecimiento del PIB aparece aquí mucho más diluido: 18.5% promedio en 1971-1974 y 17.2% en 1975-1978; el coeficiente de inversión de 1977 no tiene parangón con ninguno de los años precedentes.

Lo mismo ocurre con la tasa de formación de capital. La única caída significativa se experimentó apenas en 1978, en plena etapa final de la guerra de liberación y después de un coeficiente excepcionalmente alto en 1977. La división del decenio en subperíodos no arroja diferencias relevantes: 21.3% en 1971-1974 y 20.0 en 1975-1978, pero si este año políticamente "anormal" es excluido, el promedio sube a 22.6.

Si por crisis económica se entiende un fuerte movimiento de descapitalización, o, a la inversa, la descapitalización se interpreta como causa o al menos indicador de crisis, es evidente que tampoco en este sentido puede hablarse con propiedad de una crisis económica en la Nicaragua prerrevolucionaria.

El cuadro 8 confirma este panorama en lo que se refiere al capitalismo agrario. El año agrícola 1977-1978 fue, desde esta perspectiva, excelente. El cuadro ratifica asimismo lo señalado en el punto *a* respecto del involu-

Cuadro 8

NICARAGUA: INDICADORES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 1973-1980

Años	<i>Manzanas sembradas de algodón*</i>	<i>Manzanas cosechadas de ajonjolí*</i>	<i>Cafetos en producción*</i>	<i>Manzanas cosechadas de caña de azúcar*</i>
1973-74	259.3	6.1	204.2	44.5
1974-75	254.3	6.7	231.5	50.1
1975-76	204.6	9.2	254.1	60.8
1976-77	283.0	7.9	190.9	56.6
1977-78	310.8	12.1	193.3	57.3
1978-79	248.1	13.7	195.7	56.7
1979-80	64.0	11.4	s.i.	s.i.

* En miles.

FUENTE: BCN e INEC.

cramiento de último momento de las fracciones superiores de las clases propietarias en la oposición a la dictadura. Es evidente que todavía a fines de 1977 y principios de 1978 la burguesía nicaragüense estaba pensando en la economía, no en la política.

En síntesis, estas tres aproximaciones complementarias a la cuestión no aportan elementos para refrendar la hipótesis de la crisis económica en la

base de la bancarrota de la dictadura y en el triunfo revolucionario, y más bien ayudan a rechazarla. No se advierte un corte significativo en el desenvolvimiento de la economía, una acumulación y condensación de contradicciones estructurales que, por eso mismo, llevan al sistema a la parálisis o el desbarajuste total, rompiendo el encadenamiento de sus sectores y desarticulando su vinculación con el mercado internacional. Lo más que podría decirse es que existía una tendencia a la desaceleración del crecimiento económico, que se hace más clara en la segunda parte de la década de 1970. Aquí la economía de Nicaragua no se diferencia significativamente de la del conjunto del área centroamericana.

Las explicaciones para esto son variadas. El auxilio permanente de Estados Unidos y la benevolencia de los organismos financieros internacionales controlados o decisivamente influidos por Estados Unidos y la tolerancia hacia el fuerte endeudamiento externo de la dictadura constituyen algunas de ellas. Pero el objetivo aquí no es indagar esas causas sino tratar de detectar en la economía nicaragüense anterior al triunfo sandinista, elementos que permitan identificar la existencia de una crisis.

El cuadro 9 confirma lo señalado en lo que respecta al efecto del mercado internacional sobre la economía nacional. Tampoco existen aquí

Cuadro 9

NICARAGUA Y AMÉRICA LATINA: EFECTO DE LOS TÉRMINOS
DEL INTERCAMBIO, 1970-1981

Años	Nicaragua		América Latina ^c
	Millones de córdobas de 1980 ^a	% de cambio respecto del año anterior ^b	% de cambio respecto del año anterior
1970	163.9	—	—
1971	— 44.6	—	—
1972	249.5	10.4	3.6
1973	137.8	— 4.6	10.3
1974	— 758.6	— 4.4	— 2.4
1975	—2 225.3	—17.8	— 9.1
1976	122.2	15.0	2.0
1977	1 725.1	8.0	9.0
1978	584.4	—12.0	—19.0
1979	— 134.8	— 3.0	— 6.0
1980	s.i.	— 4.0	— 8.0
1981	s.i.	—13.0	—10.0

^a FUENTE: World Bank, *Nicaragua: The Challenge of Reconstruction*, Washington, 1981.

^b FUENTE: CEPAL.

^c Incluye únicamente a los países que no son exportadores de petróleo. FUENTE: CEPAL.

cortes o rupturas, o, al contrario, reiteración y acumulación de tendencias negativas que permitan identificar la crisis, y ligar a ésta el ascenso revolucionario. Los años anteriores a la etapa final de la guerra de liberación no fueron nada malos y el saldo acumulado del subperíodo 1975-1978 es de efectos positivos tanto en el cálculo del Banco Mundial como en el de CEPAL, mientras que el de 1971-1974 fue negativo. Es decir que el corte se da, pero en el sentido de un refuerzo ligeramente positivo a la economía nacional.

Finalmente, la comparación de la situación de Nicaragua con la de los demás países no petroleros de América Latina muestra que, en términos generales, la articulación de la economía nacional con el mercado mundial no fue peor que la del resto del continente.

El cuadro 10 presenta el alza del costo de la vida. Los alimentos crecieron más que el promedio y, en la medida en que la participación de ese rubro en el índice general es mayor cuanto menor es el nivel de los ingresos, la

Cuadro 10

NICARAGUA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR*

<i>Años</i>	<i>Índice general</i>	<i>Crecimiento (%)</i>	<i>Alimentos, bebidas y tabaco</i>	<i>Crecimiento (%)</i>
1972	100.00	—	100.00	—
1973 ^a	127.02	27.0	141.17	41.2
1974	143.94	13.3	162.83	15.3
1975	154.77	7.5	175.44	7.7
1976	159.13	2.8	177.44	1.2
1977	177.26	11.4	203.75	14.8
1978	183.34	4.5	211.02	3.5
1979	274.64	48.1	344.66	63.3
1980	371.59	35.3	513.91	49.1
1981	453.67	23.9	652.46	29.0

* Base: mayo-octubre de 1972 = 100.

^a Promedio octubre-diciembre.

FUENTE: INEC y CETRA.

serie indica que las clases populares sintieron más que nadie el aumento de precios. Pero el incremento fue lento, incluso en el rubro alimentación. No parece evidente que el costo de vida se hiciera insoportable o más desesperante que a principios del decenio.

Una conclusión parecida surge del cuadro 11. No hay duda de que el nivel absoluto de los salarios era bajo. En 1972, por ejemplo, el salario mínimo legal era de casi 11 córdobas, el semanal \$75.60, el quincenal \$164,

y el mensual \$323; en 1975 eran, respectivamente, \$13, \$92, \$200 y \$401.* Además, una cosa son las disposiciones legales —a menudo promulgadas para quedar bien en la asamblea general de la OIT— y otra cosa las prácticas capitalistas, sobre todo en un capitalismo como el somocista. Sin duda los niveles efectivamente pagados fueron sensiblemente inferiores, aunque no se dispone de información sobre el particular. De todos modos resulta claro que, incluso reteniendo estas observaciones, las remuneraciones mantuvieron su nivel real, y no surge de los datos consultados un deterioro sensible del poder adquisitivo de los trabajadores en el periodo anterior a la etapa final de la lucha contra la dictadura.

La información del cuadro 11, sin embargo, cubre una proporción reducida de las clases populares puesto que toma en cuenta el salario promedio mensual y ya se ha señalado que sólo una parte pequeña de esas clases

Cuadro 11

SALARIO REAL (1972=100)*

Año	Promedio general	Agricultura	Industria manufacturera	Comercio	Servicios
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	85.5	89.3	84.6	74.6	80.3
1974	86.6	92.6	86.2	75.6	83.6
1975	66.0	89.3	82.3	75.5	82.5
1976	87.8	91.5	86.4	75.7	83.2
1977	86.3	103.0	84.6	73.9	78.9
1978	86.3	97.6	85.3	71.8	78.5

* Salario promedio mensual.

FUENTE: CETRA, sobre datos de BCN e INEC.

percibe sus ingresos mes a mes (*cfr. supra*, apartado *b*). Por eso la estabilidad del salario real contrasta con la muy reducida participación de la mitad inferior de los perceptores del ingreso nacional —de hecho, la menor de Centroamérica si exceptuamos a El Salvador (cuadro 3)— y, sobre todo, con el deterioro del ingreso per cápita que surge del cuadro 12.

Más aún, se advierte en los datos de este cuadro un corte muy marcado entre los dos subperiodos en que hemos venido dividiendo el decenio. Mientras en 1971-1974 el PIB por habitante creció a un ritmo promedio anual de 3.1%, en 1975-1978 la tasa media anual fue exactamente la opuesta: —3.2%. Vale decir que el crecimiento de la primera mitad del decenio se transformó en reducción en la segunda, aunque seguramente

* Cifras del Banco Central de Nicaragua, *Indicadores económicos*. La información se refiere a Managua solamente; en el interior los niveles eran menores.

las ganancias y las pérdidas no se repartieron de la misma manera y no fueron los grupos que concentraron el crecimiento los que experimentaron las reducciones. Sin necesidad de ser demasiado imaginativos, parece claro que así como los tramos superiores de la escala de ingresos concentraron las ganancias, así también las pérdidas fueron "monopolizadas" por las clases populares y, hasta donde es posible hacer inferencias de la combinación de los cuadros 11 y 12, fundamentalmente por los grupos no asalariados, y en general de ingresos no mensuales, del campo popular.

A partir de la segunda mitad de la década de 1970 hubo pues un proceso de ahondamiento de la pauperización de las masas populares que sin duda desempeñó un papel motorizador en su integración a la lucha revolu-

Cuadro 12

NICARAGUA: PIB POR
HABITANTE, 1970-1980

<i>Año</i>	<i>Córdobas</i>	<i>Tasa de crecimiento (%)</i>
1970	1 095	—
1971	1 116	1.9
1972	1 113	— 0.2
1973	1 135	2.0
1974	1 235	8.8
1975	1 218	— 1.3
1976	1 233	1.2
1977	1 201	— 2.6
1978	1 078	—10.2
1979	777	—27.9
1980	840	8.1

FUENTE: Banco Mundial.

cionaria. Este agravamiento de las condiciones generales de vida habría sido más intenso para las clases populares urbanas que para las del campo, para los sin trabajo y los que laboran en actividades no productivas más que para los que lo hacían en los sectores productivos, y para los no asalariados más que para los asalariados.

Esta situación representa bien el carácter expoliador del capitalismo periférico en Nicaragua y las complejas modalidades de su articulación con formas no plenamente capitalistas de producción y reproducción. Pero el empobrecimiento creciente de las masas, la degradación de sus formas de vida, incluso en los aspectos primitivos y brutales de la última etapa de la dictadura, no bastan para configurar una crisis económica.

La crisis económica vino después: fundamentalmente hacia mediados de 1978 —aunque ya se señaló la tendencia de largo plazo a la caída de la tasa de crecimiento, y es posible que signos de retracción en el comportamiento empresario de la burguesía puedan ser identificados a partir del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro— y se desarrolló vertiginosamente a medida que la lucha revolucionaria crecía y su aproximación a la victoria era sólo cuestión de tiempo. Fue este ascenso de la lucha sandinista, y la crisis general y definitiva de la dictadura —la pérdida progresiva del respaldo estadounidense, la exacerbación del saqueo de la economía por los grupos palaciegos, la inseguridad general que se apoderó de las clases dominantes por la brutalidad represiva y por el propio avance revolucionario— lo que motivó la gestación y el desarrollo tan veloz de la crisis económica, y no al revés.

La crisis económica que se desencadena en 1978 no fue el producto de un modo objetivo del funcionamiento de la economía, sino de la reorientación política de parte creciente de sus recursos (el endeudamiento externo por ejemplo) para tratar de frenar el ascenso revolucionario o para acelerar el enriquecimiento de los titulares del poder dictatorial, de la fuga de capitales ante la proximidad de la derrota, de la expatriación de activos, en fin, de la progresiva parálisis de la economía a medida que la guerra de liberación cubría con su desarrollo el conjunto de la sociedad y aceleraba la quiebra de un sistema de dominación inicuo. En la medida que el capitalismo periférico de Nicaragua tenía como una de sus bases estratégicas de sustentación al Estado somocista y a su régimen de represión, fraude y patrimonialismo, la bancarrota del Estado arrastraba consigo la crisis de la economía.

La intensificación de la explotación, el marginamiento y la opresión de las clases populares aceleraron y masificaron su incorporación a la lucha contra el somocismo. Pero es evidente que el hambre, la conciencia de la injusticia social, o el peso de la represión, no son suficientes para movilizar políticamente al conjunto de la población.* El pueblo de Nicaragua salió a las calles a luchar y a morir porque existían las condiciones políticas y organizativas creadas por casi dos décadas de lucha sandinista. Fue la lucha sandinista la que convirtió a elementos históricos y cotidianos de las masas nicaragüenses —la miseria, el hambre, la falta de trabajo, la opresión, la ignorancia, la rebelión contra la injusticia, las ansias de una vida mejor, el repudio a la dictadura— en fuerzas de combate para la guerra contra el somocismo. Las masas se incorporaron a esa guerra porque existían estructuras organizativas para hacerlo, que eran el resultado de la lucha del FSLN. Salieron a pelear porque el testimonio de dos décadas de lucha sandinista y de su avance incontenible creó en ellas un sentimiento de eficacia política que la represión de la dictadura no pudo doblegar.

En resumen, no hubo crisis económica: hubo una Revolución.

* B. Moore Jr. (1978) analiza la multiplicidad de factores objetivos y subjetivos que en coyunturas determinadas impulsan a las clases populares a la rebelión.

e. Centralidad de la cuestión democrática

Los elementos planteados en los puntos anteriores ayudan a explicar la centralidad de la cuestión democrática en la lucha contra la dictadura somocista y el modo como ella fue conjugada por el FSLN a una estrategia popular y antimperialista con un horizonte de profundos cambios sociales.

El somocismo fue caracterizado como un régimen de explotación económica, opresión politicomilitar y subordinación al imperialismo, con un contenido de clase oligarquicoburgués, fuertemente represivo y políticamente marginador. Esta identificación del somocismo permitió convocar a la lucha a amplios sectores de la población que antagonizaban con él no sólo, o no tanto, por contradicciones de tipo económico sino por su monopolio dinástico del poder político institucional, por su connivencia servil con Estados Unidos, por sus prácticas de enriquecimiento a expensas del patrimonio público, por el oscurantismo cultural, por el atraso general de la sociedad, por la persecución política y la represión generalizada. Importantes grupos de intelectuales, profesionales de la pequeña burguesía y de la burguesía mediana fueron incorporados así a diversos niveles de compromiso con la actividad revolucionaria, y elementos de la burguesía pasaron a colaborar, de alguna manera, con la lucha contra la dictadura. Al mismo tiempo, la caracterización de ésta como un fenómeno clasista e imperialista erigía a las clases populares como fuerza motriz fundamental de la revolución, subordinaba las reivindicaciones de aquellos grupos a las demandas de éstas, y confería a la cuestión democrática, así planteada, un contenido revolucionario, popular y antimperialista.* La demostración de la continuidad histórica de la lucha revolucionaria contemporánea con la gesta del general Sandino y la preocupación permanente por articular las prácticas del presente con las tradiciones nacionalistas de la cultura popular, la literatura y la historia nacional, consolidaron el espacio democrático y antimperialista como un ámbito titularizado de manera cada vez más clara por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.**

La lucha politicomilitar contra el régimen y la creciente vinculación de la vanguardia con el pueblo trabajador se combinaron con una convocatoria a extensos sectores de población que tuvieran alguna contradicción con aquél. Esta estrategia permitió la estructuración de la lucha revolucionaria como lucha democrática hegemónica por el campo popular.

* C. M. Vilas (1980:99-117) efectúa un planteamiento general de la articulación de la cuestión democrática y la cuestión de clase en las luchas de liberación nacional.

** "Según vienen sucediendo las cosas en Nicaragua, el Frente Sandinista se convierte en un destacamento de vanguardia, al cumplir también las veces de destacamento del pueblo, o sea, un movimiento nacional. Tal vez sea apropiado calificar a nuestro destacamento de proletariado popular" (Fonseca, 1981:309). "En la educación política de nuestra militancia y de nuestro pueblo, tenemos que utilizar en una medida todavía mayor que en el pasado, los textos revolucionarios representativos de nuestro pueblo, de nuestra tradición histórica" (*ibid*: 315).

La articulación popular-revolucionaria de la cuestión democrática permitió asimismo neutralizar las estrategias de última hora de la gran burguesía y el imperialismo, forzando a aquélla a entrar a regañadientes y a último momento a la oposición al régimen, como fuerza subordinada de un vasto movimiento que expresaba, fundamentalmente, a las clases populares.*

3. Tensiones en la nueva etapa

La exposición de la sección precedente apuntó a una identificación a grandes trazos de los aspectos principales que contribuyen a dar especificidad al capitalismo nicaragüense y que condicionaron la forma en que el proceso revolucionario se desarrolló y avanzó hacia el triunfo: un capitalismo agroindustrial, subordinado al imperialismo más en términos financierocomerciales y políticos que económicos directos, con un proletariado reducido e inmerso en y no plenamente diferenciado de un vasto semi-proletariado, una fuerte gravitación productiva de la pequeña y la mediana propiedades, y una gran burguesía más significativa en el ámbito del capital comercial y financiero que en el propiamente productivo. Un proceso revolucionario cuya vanguardia reconoce en las clases populares a sus fuerzas motrices, pero que incorporó a la lucha, en variados niveles de compromiso y organicidad, a amplios sectores de la pequeña burguesía mediana e incluso a algunos elementos de la gran burguesía.

Estas características están presentes asimismo en la etapa que se abre con la derrota del somocismo y condicionan las modalidades de avance de la revolución. La caracterización de esta etapa como democrática, popular y antimperialista, basada en una estrategia de economía mixta, pluralismo político y unidad nacional, es un resultado de esas especificidades de la sociedad nicaragüense y del modo en que ellas fueron procesadas por el desarrollo de la revolución.

En esta sección nos limitaremos a efectuar una breve presentación de la forma en que ellas se expresan en un conjunto de cuestiones y a señalar algunas de las tensiones que se generan a su respecto; la presentación no tiene más valor que el de un conjunto de hipótesis y relega para una ocasión posterior un desarrollo más detenido de los temas.**

a. *La cuestión de la gran propiedad*

La imagen de una economía controlada por el somocismo, la gran propiedad burguesa nacional y el imperialismo, sobre la cual crear una amplia Área de Propiedad del Pueblo que se convirtiera en el eje dinámico de

* El COSEP reconoció formalmente a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional apenas el 24 de junio de 1979.

** Véase una aproximación a estas cuestiones en C. M. Vilas (1982:89-124).

una rápida recuperación, probó ser sólo parcialmente correcta. Ya se señaló que la participación del gran capital tenía lugar sobre todo en las actividades financieras y de comercialización, más que en la producción. Las nacionalizaciones revolucionarias convirtieron en propiedad del nuevo Estado los resortes del poder económico de la dictadura: el comercio exterior, el sistema financiero, su capital agroindustrial, transportes, y algunas de las formas más tradicionales de la presencia imperialista. Pero en términos estrictamente productivos el alcance del APP es relativamente limitado: a mediados de 1980 representaba en conjunto 25% de la producción material (cuadro 13). En lo que toca a sus sectores productivos, la economía nicaragüense es fundamentalmente una economía privada,

Cuadro 13

NICARAGUA: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
POR TIPO DE PROPIEDAD, 1980
(porcentaje de la producción)

<i>Sector</i>	<i>Propiedad privada</i>		<i>Sub- total</i>	<i>APP</i>	<i>Total</i>
	<i>a) grande</i>	<i>b) pequeña</i>			
Agricultura	29	50	79	21	100
Industria	45	30	75	25	100
Total*	37	38	75	25	100

* Incluye minería y construcciones.

con fuerte peso de la producción pequeña y mediana. Las nacionalizaciones posteriores han ampliado la participación del APP, pero sin alterar significativamente las proporciones.*

Sin embargo, aquella imagen parece haber estado presente en algunos cuadros técnicos y académicos y en la planificación inicial de la política económica. Los "sujetos históricos de la Nueva Economía" en esta etapa de recuperación y reconstrucción debían ser fundamentalmente, en cuanto

* En términos globales el APP daba cuenta, a mediados de 1981, de aproximadamente 40% de la producción nacional, con marcadas variaciones entre sectores y actividades: 21% en el sector agropecuario, 33% en la industria, 70% en la construcción y alrededor del 95% en minería. Además, la totalidad del sistema bancario, compañías de ahorro y préstamo, compañías de seguros, acopio interno y comercio exterior de los productos tradicionales de exportación. En julio de 1981 se nacionalizó la distribución de azúcar, de las exportaciones de café soluble, ron, aguardiente, concentrados y esencias de licores, y varios productos y sustancias químicas; además, se decidió la confiscación e incorporación al APP de las propiedades abandonadas por sus dueños o sometidas a prácticas de descapitalización.

a capacidad de inversión, el APP y la empresa privada —esta última pensada, sobre todo, como gran capital productivo. Las metas que se fijaron estuvieron acordes con este esquema de dos grandes polos de dinamismo productivo.*

La realidad demuestra que sin perjuicio de su participación en la producción, la acción económica del Estado tiene lugar especialmente por la vía indirecta del sistema financiero, la fijación de precios y la comercialización, la legislación laboral y salarial. Vale decir, una incidencia mediada por la eficacia de los instrumentos de política económica y financiera, y por la receptividad de los productores privados.

La práctica de tres años de “Nueva Economía” demuestra que no existe un enfrentamiento de principio entre ésta y la gran propiedad privada, en la medida en que ella adopte los criterios de afectación productiva fijados por el Estado revolucionario. La contradicción se da cuando aparecen comportamientos de ociosidad, ausentismo, abandono del país por los propietarios, o colaboración o incorporación de éstos a actividades contrarrevolucionarias.

La ley de Reforma Agraria plantea entre sus objetivos la necesidad de “superar las formas de propiedades y explotación de la tierra rentista, extensivas e ineficientes” y “la explotación inicua del trabajo campesino bajo las modalidades de mediería, aparcería, colonato y formas similares”; “fomentar la producción y la productividad, garantizar el uso más adecuado y racional de la tierra, así como la protección de los suelos y el mejor aprovechamiento de las aguas y demás recursos naturales”. En consecuencia “garantiza la propiedad de la tierra a todos aquellos que la trabajan productiva y eficientemente” (art. 1) y afecta a la Reforma Agraria solamente las tierras ociosas, deficientemente explotadas o dadas en arrendamiento, de propietarios de más de 500 ó 1 000 manzanas según la región, o bien que no están siendo explotadas por sus propietarios sino dadas “en mediería, aparcería, colonato y precarismo u otras formas similares de explotación campesina, así como por cooperativas u otras formas asociativas” (art. 2).

Así como la gran propiedad agraria, eficientemente afectada al proceso productivo, queda al margen de la Reforma Agraria, en el sector urbano el capital industrial que acepta los lineamientos de política económica es respaldado, y se le garantizan los recursos para un funcionamiento aceptable. En 1980, por ejemplo, el 73% de las exoneraciones impositivas se dirigió hacia el sector privado de la industria, con fuerte participación de

* El PIB debía crecer 22% en 1980 y 18.5% en 1981, garantizando una plena recuperación en no más de dos años. Las tasas reales fueron 10.7% y 6% respectivamente. El resultado fue bueno, considerando la destrucción de activos y el desbarajuste general de la economía, o comparándolo con los registros de los otros países del istmo. Pero el sobredimensionamiento de las metas hizo que los resultados fueran recibidos con cierta desazón y aún hoy se percibe cierta sensación de fracaso en algunos sectores técnicos —y, por supuesto, en la propaganda opositora y contrarrevolucionaria. Por otra parte, estas metas sobredimensionadas parecen haber estado presentes en la renegociación de la deuda externa recibida del somocismo.

las grandes empresas.* Durante ese año y el siguiente el Sistema Financiero Nacional financió el 100% de los requerimientos de capital de trabajo y de inversión del sector privado, en contraste con las políticas financieras de la dictadura que nunca financiaron más del 70% de esos requerimientos.

No obstante, el comportamiento económico de la empresa privada no ha respondido a las expectativas depositadas en ella. En 1979 la inversión de la burguesía fue casi 62% menor que en 1978, y en 1980 fue un 45% menor que en 1979; en 1980 la inversión privada fija representó apenas 21% del valor de 1978. La retracción se siente sobre todo en el sector industrial, donde la gran burguesía representa 45% de la producción. El comportamiento a la baja es protagonizado fundamentalmente por los grandes productores; según el Ministerio de Planificación, "... a pesar de los incentivos fiscales y financieros que el gobierno revolucionario ha ofrecido, del proceso de normalización laboral, y de la rápida expansión del mercado nacional y de los precios, se evidencia que los grandes productores privados no se han mostrado dispuestos a respaldar la reactivación con su propia inversión. Así, aunque objetivamente las ganancias se han recuperado mucho más rápidamente que los salarios, la cooperación del sector empresarial se ha limitado a levantar la producción, pero su actitud respecto de la inversión ha sido ambigua". (Nicaragua, Ministerio de Planificación, sf: 121.)**

Todavía no parece estar claro para el Estado revolucionario cuál es la causa de este comportamiento: el ejercicio de un boicot político orientado a desestabilizar la marcha del proceso, o bien una respuesta a la falta de incentivos suficientes o a expectativas de futuro negativas. Sin rechazar la evidencia de que la falta de inversiones y la descapitalización obedecen, en algunos sectores de la empresa privada, a un designio político contrarrevolucionario, es necesario contemplar los otros dos elementos. El hecho de que también ellos provoquen objetivamente disturbios económicos que tienen claros efectos políticos, no impide analizarlos dentro de su propia especificidad.

Es posible plantear así la hipótesis de que la revolución está creando un nuevo sistema socioeconómico que, a pesar de que contempla un espacio para la empresa privada mediana y grande, no es atractivo para el tipo de gran empresa que efectivamente se desarrolló en Nicaragua. Mantiene la propiedad de los medios de producción —salvo los casos ya señalados— pero la nacionalización del sistema financiero, de las exportaciones y de parte del comercio interior, el control de cambios, la presión tributaria, reducen su capacidad de control de las condiciones de valorización del capital y de realización y disposición del excedente; la presión sindical y la vigilancia estatal en materia de condiciones de trabajo, convenios colectivos,

* Véase *El Nuevo Diario*, 20 de julio de 1981.

** Véase también *Barricada* del 4 de mayo de 1982, donde se demuestran, para la producción de algodón en el Departamento de León, los mayores niveles de eficiencia productiva del APP y de la pequeña y mediana producción.

vigencia de la legislación laboral, etcétera, reducen la intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo; la paridad monetaria y las restricciones a las importaciones definen un futuro de incertidumbre para una clase acostumbrada a la ganancia fácil, inmediata y exorbitante. El lenguaje político dominante, que subraya el horizonte socialista de la revolución, agrega elementos de inseguridad; el rechazo a la soberanía del propietario en la empresa, la legitimación de la clase en función de su papel efectivo en el proceso productivo, la obligación política de producir, desconciertan o asustan a una clase tradicionalmente acostumbrada a considerar la producción un sacrificio, la inversión un gasto y el excedente el paso para el consumo suntuario. La conservación de los medios de producción tiene lugar en el marco de un sistema político que ideológicamente destaca los valores del socialismo y del *ethos* proletario.

Cuando la subjetividad de la clase desempeña un papel tan decisivo, no debería sorprender que el incremento de la producción de la empresa privada sea menor que el crecimiento de las facilidades financieras que el gobierno revolucionario le ha acordado. Los créditos han sido convertidos en dólares para sacarlos del país a través del mercado paralelo de divisas —un mercado oficialmente tolerado hasta septiembre de 1981—; paulatinamente el capital productivo se desplazó hacia la esfera del comercio y la especulación; el hato ganadero se redujo rápidamente por faenamientos de vientres; los precios de transferencia, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones permitieron la exportación ilícita de ganancias y la reducción de la base imponible respectiva; no se crean reservas de depreciación en muchas empresas, y en algunos sectores de la empresa privada se aprecia una tendencia a la descapitalización.

Estos factores favorecen el desarrollo de un movimiento de transferencia de excedente desde el sector público al sector privado, y desde los sectores productivos a los no productivos: un efecto opuesto al esperado por la política económica. La nacionalización del sector financiero dificulta o limita estos movimientos, pero no ha podido hasta ahora eliminarlos. La estatización del sistema financiero parece no haber sido suficiente para eliminar la capacidad de maniobra y de reproducción de la burguesía, y que emana de esa propiedad de los medios de producción y del control subsiguiente de variables económicas estratégicas. Asimismo la inexperiencia del nuevo aparato estatal y la presencia en él de elementos de la burguesía o formados profesionalmente en el marco de sus orientaciones politicotécnicas y de la racionalidad económica capitalista, favorecen adicionalmente el desenvolvimiento de esas tendencias.*

La retracción de la gran empresa prolonga y ahonda la crisis económica que desde 1978 atraviesa el país, fortaleciendo las fuerzas recesivas desatadas por la caída de la producción y la destrucción del aparato productivo generadas por la fuga de capitales en el tramo final de la guerra

* Cabe destacar, en este sentido, que muchos de los funcionarios que participaron de la definición de la política económica en los primeros tiempos, fueron abandonando el Estado, el país e incluso la Revolución en los últimos dos años.

de liberación, por el descalabro financiero del somocismo y por los daños ocasionados por las maniobras desesperadas de la dictadura para detener el avance del FSLN.

Este comportamiento de la gran burguesía ha sido denunciado y enfrentado por intensas movilizaciones de las organizaciones de masas que reclamaban la nacionalización de los medios de producción afectados, el enjuiciamiento de los responsables y la adopción de medidas preventivas, y un mayor control obrero. Acompañadas por ocupaciones de tierras y tomas de empresas afectadas por las maniobras descapitalizadoras, esas movilizaciones marcaron la tónica del primer semestre de 1981 y abonaron el camino para la sanción de las leyes de reforma agraria y de prevención de la descapitalización, y señalaron un punto de inflexión en la marcha del proceso, que será analizado más adelante. Ellas enmarcaron asimismo las nuevas nacionalizaciones anunciadas en el segundo aniversario del triunfo revolucionario.

b. Alianzas y tensiones en la unidad nacional

El proyecto de unidad nacional impulsado por la revolución popular sandinista se apoya sobre un conjunto de alianzas que no excluyen la existencia de tensiones y contradicciones entre las fuerzas convergentes. En la práctica se expresa como un sistema complejo de coexistencia de clases sin conciliación de clases, en la medida que es un sistema que expresa en definitiva la hegemonía del campo popular y la subordinación política de la burguesía.

El polo dinámico de la alianza aparece caracterizado en términos de *pueblo* más que de *clases*. Engloba por lo tanto al proletariado propiamente tal y al campesinado, como a los pobres de la ciudad y del campo, los pequeños y medianos propietarios, el artesanado, los pobladores de barrios precarios, el estudiantado, sectores técnicos y profesionales, pequeña burguesía asalariada. En síntesis, todas las clases, grupos y fracciones que con su compromiso efectivo impulsan la consolidación y el avance del proceso revolucionario.

Se trata de una caracterización politicoideológica que tiene un referente de clase, pero que no se agota en la clase. El eje articulador del campo popular es un eje político, más que económico estructural. Abarca sectores que no se constituyen como sujetos de acción social por su inserción en las relaciones de producción pero cuyas prácticas se articulan en una perspectiva histórica que es en definitiva de clase y que las sobredetermina (las reivindicaciones de las mujeres, el movimiento estudiantil, la incorporación a la defensa nacional, y similares). Al ser una caracterización politicoideológica, permite la incorporación de clases y fracciones que, sin perjuicio de su inserción diferente o antagónica en el plano de la estructura de producción y circulación, se integran a las tareas de la revolución o las apoyan, del mismo modo que puede colocar fuera de esta

caracterización de pueblo a elementos u organizaciones que se oponen o enfrentan al proceso revolucionario no obstante su pertenencia estructural al terreno popular.

El *pueblo* es por lo tanto una fuerza demográficamente heterogénea y socialmente contradictoria, unificada políticamente por la dinámica de la revolución. La existencia de esas contradicciones no se desconoce, pero su desarrollo es subordinado y trata de ser orientado en función de las metas a que tiende la unidad nacional: recuperación económica, superación de la crisis, defensa nacional: "Las contradicciones que provocan, son contradicciones menos importantes que las soluciones que aportan en la lucha contra el enemigo común. Las contradicciones internas a nivel de las clases sociales, son menos importantes que los logros materiales que obtenemos en la reconstrucción de las bases de la economía nacional." (Wheeler, J., 1981:68-69.)

En este marco, las clases trabajadoras han experimentado un rápido proceso de organización y desarrollo. Desde agosto de 1979 a diciembre de 1981 se inscribieron ante el Ministerio del Trabajo más de 1 000 sindicatos, con casi 80 000 trabajadores; en tiempos del somocismo estaban inscritos solamente 173 sindicatos con menos de 23 000 afiliados. También entre agosto de 1979 y diciembre de 1981 se registraron 546 convenios colectivos que abarcaron a más de 130 000 trabajadores; 65% fue negociado por sindicatos afiliados a la CST.* En diciembre de 1979 se constituyó la ATC, que agrupaba en esa época a los obreros agrícolas y a campesinos y productores medios. A fines de 1980 las principales organizaciones obreras constituyeron la Coordinadora Sindical de Nicaragua para impulsar las tareas del movimiento obrero en la revolución.** En el campo, el movimiento cooperativo adquirió gran auge; a mediados de 1981 casi un tercio de la población campesina del país trabajaba en más de 2 000 cooperativas.*** Un movimiento similar se desarrolló en los estudiantes, mujeres, profesionales y técnicos, y habitantes de barrios.

Este proceso testimonia la progresiva maduración política de las clases y su desarrollo diferenciado en el marco del proceso unitario popular. En marzo de 1981 se creó la UNAG, como organización propia de los campesinos y los productores agropecuarios medianos, separándolos por la especificidad de sus intereses y sus demandas de los obreros agrícolas de la ATC.

La consolidación organizativa del campo popular tiene lugar como parte de una intensa lucha de clases. Las amplias bases sociales hacia las cuales se orientan la estrategia del FSLN y la política del Estado revolucionario

* Si el período agosto de 1979-diciembre de 1980 fue el de la sindicalización urbana (71% de los nuevos sindicatos pertenecían a la industria manufacturera, la construcción y los servicios), 1981 fue claramente el año de la sindicalización rural: 79% de los nuevos sindicatos correspondió al sector agrícola. Fuente: Ministerio del Trabajo, *Estadísticas sociolaborales*, 3 y 4, y CETRA.

** Cfr. *Barricada*, 3 de diciembre de 1980.

*** La mayoría consiste en cooperativas de créditos y servicios: 72% de las cooperativas con 83% de los asociados.

experimentan simultáneamente las interpelaciones ideológicas de las organizaciones políticas y sindicales de la oposición. Sin los compromisos y las responsabilidades que comporta la función de gobierno y la conducción de la economía en las circunstancias presentes, alimentan las presiones reivindicativas en un contexto de crecientes limitaciones económicas, financieras y de empleo, y de agravamiento de la situación internacional, articulando a ésta su propia estrategia de acción.

La fluidez de las relaciones dentro del campo popular y el desenvolvimiento de las tensiones que se generan entre éste y los grupos opositores están subordinados a la evolución de la situación económica general. En los años inmediatamente posteriores al triunfo revolucionario, la amplia disponibilidad de financiamiento externo y de donaciones permitió al Estado satisfacer con cierta amplitud las demandas y reivindicaciones de un amplio espectro de clases y grupos, tratando de evitar que la explosión de una demanda postergada y las presiones de un consumo comprimido, conjugadas con una estructura de oferta relativamente rígida, se tradujeran en fuertes incrementos inflacionarios. La política diseñada fue exitosa mientras se mantuvo la afluencia externa de recursos. El control de precios, los subsidios a los alimentos y servicios básicos, y el crecimiento del empleo, actuaron para determinar una mejoría real en la calidad de vida de las masas, pese a que desde mayo de 1980 el nivel de sus ingresos monetarios se mantiene constante. La participación relativamente amplia de este "salario social" en los ingresos totales de los trabajadores explica la aparente contradicción entre un nivel de vida que crece, o se mantiene, y un salario real que se deteriora.*

El manejo de los instrumentos de política no ha podido impedir, sin embargo, que algunos se beneficien más que otros. Según MIPLAN, "este proceso redistributivo [de los ingresos] fue drenado en parte por los empresarios vía inflación, que recuperaron así sus tasas de ganancia. Los más favorecidos fueron los grandes y medianos comerciantes que se vieron beneficiados por la inflación. Ésta fue del 27% y las contribuciones de los comerciantes al fisco no se incrementaron proporcionalmente. Tampoco se incrementó en esa proporción el ahorro y la inversión".**

A medida que los fondos externos fueron escaseando y que la reactivación económica se demoró, las tensiones sociales amenazaron con desembocar en una especie de juego "suma cero" difícil de procesar en el marco de las alianzas básicas. Estas condiciones cambiantes se reflejan en las políticas sectoriales del Estado revolucionario. La vigencia del proyecto de economía mixta coloca al Estado en una situación compleja y contradictoria. Lo ubica, en efecto, bajo el impacto de una crisis alimentada por la recesión de la burguesía y el progresivo bloqueo económico del imperialismo, sin poder recurrir empero —por el carácter popular de su

* En 1980 el salario real se habría deteriorado 16% para el conjunto de los trabajadores, 17.2% para los trabajadores industriales y 12.4% para los trabajadores del campo. Cfr. IHCA, *Envío*, 13, p. 14.

** *Ibidem*, p. 155.

base social— a la convencional “tecnología” burguesa de tratamiento de la crisis —reducción del empleo laboral, liberación de todos los precios menos el de la fuerza de trabajo, eliminación de subsidios al consumo y servicios básicos, atracción de capitales extranjeros, devaluación— que favorecen la elevación de la explotación popular y el aumento de la tasa de ganancia; ni a criterios más drásticos y expeditivos respecto de la empresa privada, en aras del principio de economía mixta y del potencial reactivador que se sigue reconociendo en ella.

El Estado está llamado, en estas condiciones, a dar respuesta a un sistema de presiones cruzadas. La preocupación por la autonomía reivindicativa de las organizaciones sindicales respecto de la capacidad de la empresa privada y de las políticas del Estado para satisfacer tales reivindicaciones y la descentralización de la disuasión de las medidas de acción directa hacia las propias organizaciones laborales cedieron paso a la caracterización de esas acciones —huelgas, paros, ocupaciones de empresas— como producto de la indisciplina, a una mayor articulación de las organizaciones sindicales con el Estado y a la adopción de medidas de control directo por parte de éste. Parece haber prevalecido la idea, hacia mediados de 1981, de que una excesiva activación de las reivindicaciones y las movilizaciones obreras y campesinas podría retraer aún más la actitud inversora y productiva de la empresa privada, en una coyuntura en que la situación económica y política internacional se hace más y más compleja; y la convicción de que las apelaciones al patriotismo, la honestidad y la disciplina de la empresa privada no pueden ir desprovistas de medidas de política que pongan coto y prevengan sus estrategias de exportación de capitales, desplazamiento hacia inversiones no productivas, descapitalización.

En consecuencia, las medidas adoptadas para prevenir y combatir la descapitalización y, poco después, para hacer frente a la emergencia económica, combinaron la confiscación de las empresas afectadas, la implantación de un rígido control de cambios, la tipificación de los delitos cambiario y de defraudación fiscal, el acaparamiento de productos y la especulación con los precios, el aumento de los gravámenes de importación y un mejor control sobre las mismas, con la suspensión del derecho a la huelga y la prohibición de los paros, tomas de centros de trabajo, invasiones y tomas de tierras, y posteriormente con la adopción de incentivos fiscales y cambiarios a la agroexportación.*

El control y la presión sobre la empresa privada, el impulso de las movilizaciones populares y la satisfacción de sus demandas reivindicativas y políticas, no pueden ir tan lejos como para alimentar los miedos y las

* *Cfr. Barricada*, 10 de septiembre de 1981. El art. 4 de la ley contra la descapitalización (*La Gaceta*, 3 de septiembre de 1981), prohíbe “la realización de cualquier acción tendiente a modificar por las vías de hecho las relaciones de producción en las empresas”. En diciembre de 1981 el Consejo de Estado suspendió la vigencia de las disposiciones del Código de Trabajo referidas a la huelga y paro. Un análisis de los periódicos de mayo, junio y julio de 1981 ilustra sobre los altos niveles de movilización que se alcanzaron en torno a la cuestión de la descapitalización.

hesitaciones de la burguesía; los incentivos a la empresa privada no pueden soslayar su posición subordinada en el nuevo ordenamiento social. La política del Estado reproduce de esta manera las tensiones de un proyecto de unidad nacional apoyado sobre amplias bases, donde las contradicciones sociales fundamentales deben ser subordinadas a la reconstrucción de la economía y al desarrollo de tareas democráticas y antimperialistas, pero reconociendo al mismo tiempo el papel protagónico de las clases populares.

En tal situación, cuando el mantenimiento de las alianzas básicas depende fundamentalmente de la habilidad del poder político para administrar y dinamizar un complejo sistema de equilibrios inestables y de contradicciones suspendidas unas, diferidas otras, el enfrentamiento abierto de las clases se desplaza al terreno de las prácticas y los aparatos ideológicos: la educación, la religión, la condición de la mujer, y similares.*

c. La cuestión de la hegemonía obrera en el campo popular y de la alianza obrero-campesina

Hegemonía es conducción: una cuestión política que en principio tiene poco que ver con el peso estadístico de una clase en la población. Pero si un peso cuantitativamente dominante del proletariado no es por sí mismo sinónimo de conducción política, la cuestión de la hegemonía obrera cuando el proletariado es pequeño numéricamente, cuenta con una experiencia reducida de organización y autonomía, y, además, no está totalmente diferenciado de la propiedad familiar, el trabajo estacional, formas no salariales de ingreso y actividades “por cuenta propia”, se carga con rasgos específicos y de gran complejidad.

En estas circunstancias, los intereses de clase del proletariado suelen ser asumidos por la vía de la *representación* por organizaciones nutridas socialmente de la pequeña burguesía —cuadros surgidos del artesanado, del movimiento estudiantil, profesionales...— o de las mil formas del semi-proletariado, sectores informales y similares. La representación es una relación política y no sociológica, y el desfase sociológico en la relación política no plantea por sí mismo, y dentro de ciertos límites, un problema. Al contrario, el contacto con la clase obrera contribuye a depurar de romanticismo, ingenuidad, utopía y radicalismo a estos grupos de pequeña burguesía y sectores “intermedios”, al mismo tiempo que ayuda a elevar el desarrollo intelectual del proletariado, a mejorar sus niveles organizativos, etcétera. Pero superados estos niveles iniciales de las luchas obreras, existe siempre la posibilidad fáctica y el riesgo político de que la representación derive en sustitución, y que la hegemonía en el campo popular se convierta más bien en hegemonía de los grupos cuantitativamente más numerosos y mejor entrenados de la pequeña burguesía y otros sectores “intermedios” (Pitkin, 1967; Vilas, 1982:89-124; Fonseca, 1981:129ss).

* El tema es demasiado complejo para tratarlo aquí. *Cfr.* una primera aproximación en lo que toca a la educación, en C. M. Vilas (1982a: 97-128).

Una cuestión central del proceso de construcción de la hegemonía obrera en el campo popular es la alianza obrero-campesina. También aquí cierta corriente de interpretación del pensamiento clásico ha entendido el problema como subordinación económica y política del campesinado al proletariado, y de impulso político a un proceso de proletarianización de aquéllos: creación de grandes fincas estatales, eliminación de las formas familiares de producción rural, etcétera —es decir, la variante campestre de la reducción del socialismo a estatización de la economía. En este enfoque, el papel de los trabajadores rurales consiste en generar volúmenes crecientes de excedente para alimentar a la clase obrera —fundamentalmente clase obrera urbana— y liberar márgenes cada vez mayores para la inversión productiva, tanto para la producción urbana como para el campo.

No es posible hacer aquí una crítica de esta versión supersimplista de una cuestión tan compleja. Digamos rápidamente que ella se basa en una interpretación muy peculiar del esquema marxista de la relación entre el “departamento I” (productor de medios de producción) y el “departamento II” (productor de medios de consumo): el I es visto como urbano y proletario, y el II como eminentemente agrario, campesino y, por qué no, precapitalista. Y, asimismo, una generalización de las referencias al conservatismo del campesino parcelario francés en *El 18 brumario de Luis Bonaparte*; el razonamiento plantearía que si las cosas son así con el campesino francés del siglo XIX, por lo tanto también el campesino latinoamericano del siglo XX debe ser conservador y reaccionario.

La cuestión es bastante más compleja, no sólo porque el “temperamento conservador” del campesino es un encasillamiento gratuito que no hace justicia ni a Marx ni a los campesinos, sino porque el esquema de relaciones entre el departamento I y el departamento II, y entre el campo y la ciudad, presentan características propias en un capitalismo dependiente como el nicaragüense.*

El tipo de capitalismo agrario que se desarrolló en Nicaragua definió una diferenciación bastante marcada entre la agricultura de exportación y la de granos básicos para el consumo local. Las mejores tierras, el progreso técnico y las condiciones modernas de explotación se concentraron en aquella. Como consecuencia, la producción local de granos básicos —sobre la cual reposa en lo fundamental la reproducción de la fuerza de trabajo— se mantuvo en un profundo atraso y el abastecimiento local dependió siempre en proporciones significativas de la importación.

Merced a su capacidad generadora de divisas, la agroexportación fue la fuente de financiamiento para la importación de insumos industriales, de bienes de consumo final, y para el pago del fuerte endeudamiento externo

* Cfr. una crítica reciente a este esquema simplista, en G. E. Vanden (1982:74-98); sobre el caso de Nicaragua, véase Wheelock (1980:58-75) y Deere y Marchetti (1981:40-72). Es importante señalar que el sector cooperativo representa una proporción importante de la superficie agrícola en muchas economías socialistas: 53% en la URSS, 92% en Bulgaria, 75% en Vietnam, 77% en Hungría, 93% en Corea, 86% en Alemania, etc. (cifras del decenio de 1960).

que caracterizó al somocismo. Formalmente, el sector agroexportador sería el equivalente del departamento I del esquema clásico. Pero las cosas no fueron así. Por un lado, la oferta de medios de producción está emplazada espacialmente fuera de la economía nicaragüense y mediada respecto de ésta por un mercado internacional dominado por el imperialismo y sometido a las leyes del intercambio desigual. Por otro lado, una proporción importante de las importaciones consistía en bienes de consumo —alimentos sin duda, pero también bienes de consumo no básico para los grupos de ingresos más altos y las clases dominantes—; los insumos industriales, salvo los que se ocupaban para la producción de agroquímicos, se destinaban asimismo a la producción local de mercancías industriales para el consumo de los grupos de ingresos medios y altos locales y —merced al esquema de integración regional— de los otros países del istmo.

También es distinto el esquema de relacionamiento campo/ciudad. No sólo la producción de medios de consumo está fundamentalmente fuera de la ciudad, sino también la producción de medios de producción —sea que se piense en el departamento I en términos de agroexportación o directamente como importación de insumos, maquinaria, equipo y repuestos. Además, sólo una proporción reducida de la población urbana es proletariado o, por lo menos, trabajador productivo: a fines de la década pasada dos tercios de la PEA urbana de Nicaragua estaban en los sectores no productivos (casi 300 000 personas en un total de medio millón).

Este modo de funcionamiento de la economía nicaragüense, enraizado como está en las bases estructurales de la sociedad, no puede ser modificado sin una decisiva intervención del Estado. Las clases populares y su vanguardia, erigidas en Estado revolucionario, generan la fuerza extraeconómica que impulsa la transformación de las relaciones capitalistas de producción hacia relaciones de nuevo tipo, estimula el desarrollo de las fuerzas productivas y diseña nuevos procesos de trabajo.

La política de la revolución se ha caracterizado en este sentido por un decidido impulso al sector agropecuario, particularmente al proletariado agrícola y a los pequeños y medianos productores. La reforma agraria, el estímulo a la cooperativización, la concesión de créditos y asistencia técnica, la fijación de precios, la construcción de infraestructura, tienen como meta fomentar el desarrollo de una vigorosa clase de campesinos y productores medios, incorporados de manera creciente a relaciones asociativas de producción; y, al mismo tiempo, elevar las condiciones de vida y de trabajo del proletariado agrícola a través de la garantía de las remuneraciones legales, la expansión de los servicios básicos y los ingresos no monetarios —salud, educación, subsidios al consumo—, mejoras en los sistemas de abastecimiento, apoyo a la organización sindical, etcétera. Todo ello en el marco de una priorización explícita de la producción de alimentos.*

* *Cfr.* la declaración de la Segunda Asamblea Sandinista, en *Barricada*, 1 de febrero de 1982. Esta prioridad no excluyó empero la concesión de importantes incentivos cambiarios y fiscales a los productores de agroexportación.

De esta manera la meta de la revolución en el campo no es, como en otras reformas agrarias del continente, la creación o consolidación de una burguesía agraria y el desarrollo del capitalismo agrícola en respuesta a las trabas y lastres de una oligarquía terrateniente muy atrasada, pero tampoco es, por lo menos en esta etapa, la proletarianización del agro. Se plantea más bien una articulación dinámica de un amplio sector campesino asociativo e individual, con un APP concentrado sobre todo en el sector agroindustrial y un pequeño sector propiamente capitalista. De tal manera que "en el mediano plazo, el sector agropecuario estará configurado sobre cuatro sectores socioeconómicos: a] el APP, que deberá representar entre 20% y 25% de las tierras agropecuarias del país, concentrándose en los eslabones agroindustriales y la producción directa más intensiva en capital y tecnología; b] el sector cooperativo, que deberá representar alrededor del 40% del área agropecuaria; c] el sector campesino individual, que seguirá contando con el apoyo económico de la Revolución, buscando su evolución gradual hacia formas asociativas de producción y d] el sector empresarial privado, sostén de la economía mixta y la unidad nacional". (Nicaragua, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, 1982:18; Wheelock, 1982.)

El tratamiento de la cuestión urbana, en este marco de desarrollo políticamente inducido de nuevas formas de organización de la producción, es complicado. Por un lado, porque ya se ha señalado que, en términos simplificados, la ciudad es en gran medida el ámbito de la no producción; por el otro lado, porque el impacto de la crisis externa y de los reajustes al conjunto de la estructura socioeconómica se hace sentir de manera más directa o intensa; finalmente, por los desiguales niveles de incorporación a la revolución de los pobladores del habitat urbano.

La progresiva reorientación del funcionamiento de la economía hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, el estímulo a una mejoría en la distribución del ingreso a través de medidas no monetarias y de una reducción de las distancias relativas entre los niveles de ingreso extremos, que limita los niveles superiores y eleva los inferiores, minan el desarrollo de la producción industrial local orientada hacia sectores cuantitativamente reducidos pero con una demanda fuerte y muy diversificada—limitación que se ve acentuada por la migración de buena parte de estos sectores hacia horizontes más propicios. El elevado coeficiente de importaciones que nutre al reducido sector industrial, lo hace muy vulnerable a la crisis externa y plantea, por lo menos como posibilidad técnica, el cierre de empresas o reducciones significativas en sus niveles de actividad. La escasez o directamente la falta de materias primas e insumos importados y la reducción de los mercados por efecto de la crisis limitan asimismo la elevación de la productividad del trabajo, en la medida en que a partir de ciertos niveles el aumento de productividad puede traducirse en desempleo, reforzando las tendencias ya existentes en tal sentido.

En estas circunstancias, la política del Estado revolucionario se dirige fundamentalmente al mantenimiento de los puestos de trabajo aun en

desmedro de la productividad, y a preservar hasta donde sea posible el nivel real de los ingresos populares —pero en una situación internacional de crecientes restricciones crediticias que ponen en tensión la política de endeudamiento externo y la continuidad de los subsidios. El énfasis se coloca en la disciplina laboral y en los estímulos ideológicos.

No puede desconocerse el relativo éxito, hasta los momentos actuales, de estos esfuerzos. Tres años después de la toma del poder, el FSLN ha sabido sortear la falta de alimentos, el desabastecimiento generalizado, el desplazamiento de volúmenes muy grandes de productos básicos hacia el mercado negro e incluso las hambrunas, que otros pueblos en proceso revolucionario han debido soportar en etapas similares o equivalentes. El salario real ha disminuido pero, aparte de que el asalariado es todavía, según ya se ha visto, una proporción reducida del campo popular, la política de subsidios al consumo y los servicios básicos, y otros recursos no monetarios, han acompañado aquella reducción con el mantenimiento, en líneas generales, del nivel real de vida.

Por otra parte, el menor nivel de organización de los pequeños y medianos productores urbanos —artesanos, pequeños empresarios, industriales medianos— hace más difícil la labor de coordinación que se advierte en el campo entre la intervención del Estado y los pequeños y medianos productores. No existe todavía, en el ámbito de la pequeña y mediana producción urbana, algo semejante a la UNAG, y el vacío se siente.

Parece indudable que, sin perjuicio de la intervención del Estado revolucionario, durante un buen trecho el intercambio desigual entre los sectores no productivos y los sectores productivos, y entre la ciudad y el campo, seguirá existiendo. Éste se inscribe en una estructura económica y un modo de funcionamiento cuyas transformaciones son aún recientes y sectoriales, y se refuerza con elementos que emanan del terro político-ideológico. En los primeros años de la nueva etapa, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos realizados por la dirección de la economía para incrementar el empleo en los sectores productivos, el crecimiento de los puestos de trabajo tuvo lugar mucho más en el sector no productivo que en el productivo, y más en el área urbana que en el sector agropecuario.* De igual modo, la relación remuneraciones/población ocupada, que fue tradicionalmente más favorable en el sector no agropecuario que en el agropecuario, mantiene ese sentido durante los primeros años de la revolución.**

Desde una perspectiva estrictamente económica, parece posible plantear el sobredimensionamiento del ámbito urbano, en cuanto a su participación en la producción material en esta etapa particularmente crítica para la revolución. Y si los patrones de urbanización son en definitiva un produc-

* La meta de creación de empleos en el sector productivo se cumplió en un 30% menos, mientras que la del sector no productivo se sobrecumplió en 163%; la creación de empleos en el sector urbano fue 46% mayor que la meta, y en el sector agropecuario 10% menos. (Nicaragua, Ministerio de Planificación, sf: cuadro B.V.1).

** De acuerdo con estimaciones, las relaciones serían las siguientes:

to directo del modo de organización socioeconómica dominante, no resulta aventurado plantear como hipótesis alteraciones en el patrón de urbanización vigente a medida que las nuevas modalidades de organización de la producción y la reproducción se vayan consolidando.* Pero también parece claro que, al margen de un balance tecnoeconómico, ese “sobredimensionamiento” de la participación urbana y no productiva forma parte de las condiciones políticas para el mantenimiento de las alianzas básicas que abonan la etapa presente del proceso revolucionario.

Mientras tanto, existen elementos que permiten señalar la capacidad de los grupos de pequeña burguesía —técnicos y profesionales, comerciantes pequeños y medianos, y otros— para beneficiarse más que nadie de ese esquema de intercambio desigual, sobre todo en los primeros años de la revolución. Aunque no existen cifras definitivas, parecería que aunque se impusieron topes firmes a los salarios nominales, en la práctica la masa salarial creció más en sus tramos superiores y medio superiores que en los inferiores. Sin embargo, la evolución posterior de la situación económica general y la propia política económica han tendido a modificar esta posición diferenciada. La restricción a las importaciones prescindibles, el aumento de los gravámenes aduaneros, el control de cambios, las restricciones para el turismo en el exterior, y más recientemente la racionalización y limitaciones en el consumo de combustibles, han hecho sentir su impacto en estos sectores intermedios. Aunque también parece cierto que la articula-

	(1) <i>PEA ocupada</i>	(2) <i>Remuneraciones</i>	(3) <i>(2:1)</i>
<i>1980</i>			
Agropecuaria	39.6%	24.8%	0.62
No agropecuaria	15.4%	23.0%	1.49
Total	55.0%	47.8%	0.86
<i>1981</i>			
Agropecuaria	40.3%	27.5%	0.68
No agropecuaria	14.7%	21.8%	1.48
Total	55.0%	49.3%	0.89
<i>1982</i>			
Agropecuaria	40.4%	28.2%	0.69
No agropecuaria	14.0%	21.3%	1.52
Total	54.5%	49.5%	0.90

* Aunque es demasiado pronto para emitir juicios, es probable que la reciente regionalización politicoadministrativa del país ejerza alguna influencia en una redistribución espacial de los asentamientos poblacionales.

ción de estos grupos con aparatos y prácticas administrativas hace posible, al menos para algunos de ellos, reducir dicho impacto.

Finalmente, a medida que el avance de la revolución genera situaciones más complejas y demanda una mayor reglamentación de las relaciones de los participantes en el proceso —por las razones señaladas en el punto *b* de este artículo—, se incrementa la gravitación de los componentes administrativos de todo proceso en que el Estado desempeña un papel tan decisivo en la estructuración de un nuevo orden social. Sobre todo cuando, por las causas ya señaladas, las tradiciones de participación política, de amplia circulación de la información, de crítica, son débiles y reducidas, y el desarrollo de las organizaciones de masas es desigual y debe enfrentar numerosos obstáculos al mismo tiempo que dar respuesta a una multiplicidad de tareas que la nueva etapa reclama de ellas. Todo esto en una sociedad fracturada en una miríada de unidades de decisión económica en pequeña y mediana escala cuyo desarrollo depende de una cuidadosa coordinación y armonización, en el marco de un proceso de coexistencia dinámica y no conciliadora de clases contradictorias. No deben extrañar entonces los frecuentes llamados de atención de la Dirección Nacional del FSLN sobre el desarrollo de tendencias a la burocratización. Aunque es evidente que en algunos ámbitos el burocratismo tiende a ser caracterizado como lentitud en los trámites, papeleo y cosas parecidas, antes que como separación, siquiera tendencial, del Estado respecto de sus bases sociales. Lo primero es un defecto administrativo; lo segundo es un problema político.

No debe perderse de vista que nada de esto ocurre en el vacío y que el entorno internacional de una revolución ejerce sobre ella determinaciones muy importantes. El desarrollo de la presente etapa de la revolución popular sandinista se lleva a cabo en medio de agresiones económicas, político-diplomáticas y militares del imperialismo y de fuerzas aliadas a él. Ellas apuntan claramente a la destrucción de la revolución y definen una nueva y brutal contradicción: la vida o la muerte del proceso revolucionario. En estas circunstancias, el tiempo, los ensayos y los errores que implica un amplio proceso de participación y descentralización en una sociedad con poca experiencia en esto, dejan lugar a los criterios de eficiencia y ejecutividad, reforzando las tendencias señaladas en otros lugares de este documento, hacia una más estrecha articulación de las organizaciones de masas y, en general, de la sociedad civil, con el Estado revolucionario.

Es evidente que llegado un proceso revolucionario a un punto como el presente, cuando es la existencia misma de la revolución lo que está en juego, no hay alternativa posible. Una revolución no supera automáticamente las contradicciones y tensiones de una sociedad, pero crea el marco histórico de posibilidades para que esa superación sea posible. Y si la construcción de la hegemonía obrera en el campo popular siempre es compleja, ella sólo es posible en el marco de una revolución con vida.

Bibliografía

- Arce, B. (1980), *El papel de las fuerzas motrices antes y después del triunfo*, SNEPEP del FSLN, Managua.
- Castillo, D. (1980), *Acumulación del capital y empresas transnacionales en Centroamérica*, Siglo XXI, México.
- De Franco, M. A. y C. F. Chamorro (1979), "Nicaragua: crecimiento industrial y desempleo", en *El fracaso social de la integración en Centroamérica*, EDUCA, San José.
- Deere, C. D. y P. Marchetti (1981), "The Worker Peasant Alliance in the First Year of the Nicaraguan Agrarian Reform", en *Latin American Perspectives*, 29.
- Diederich, B. (1981), *Somoza and the Legacy of US Involvement in Central America*, Dutton, Nueva York.
- Fonseca, C. (1981), *Bajo la bandera del sandinismo. Textos Políticos*, Ed. Nueva Nicaragua, Managua.
- Gramsci, A. (1977), *Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, Editori Riuniti, Roma.
- Halliday, F. y M. Molyneux (1981), *The Ethiopian Revolution*, Verso, Londres.
- Lenin, V. I. (1974), *Contenido económico del populismo*, Siglo XXI, Madrid.
- , (1974a), *Sobre el problema de los mercados*, Siglo XXI, Madrid. 1974a.
- Marx, K., *Prefacio a la Contribución a la Crítica de la economía política*.
- (1978), *Introducción general a la crítica de la economía política*, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, Argentina.
- Marx, K. y F. Engels (1980), *Escritos sobre Rusia. II. El porvenir de la comuna rural rusa*, Cuadernos de Pasado y Presente, México.
- Marx, K. N. Danielson y F. Engels (1981), *Correspondencia 1868-1895*, Siglo XXI, México.
- Moore, B. Jr. (1978), *Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt*, M. E. Sharpe, Nueva York.
- Nicaragua, Ministerio de Planificación (sf), *Programa económico de austeridad y eficiencia*.
- Nicaragua, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (1982), *Tres años de Reforma Agraria*, Managua.
- Núñez, O. (1980), *El somocismo: desarrollo y contradicciones del modelo capitalista agroexportador en Nicaragua, 1950-1975*, Centro de Estudios sobre América, La Habana.
- (1980a), "La tercera fuerza social en los movimientos de liberación nacional", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, 27.
- Pitkin, H. F. (1967), *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley.

- Rosenthal, G. (1982), "Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la posguerra", en *Centroamérica: crisis y política internacional*, Siglo XXI, México.
- Vanden, H. E. (1982), "Marxism and the Peasantry in Latin America: Marginalization or Mobilization?", en *Latin American Perspectives*, 35.
- Vilas, C. M. (1980), "Hipótesis sobre liberación nacional y liberación social en la etapa actual del imperialismo", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, 27.
- (1982), "Las contradicciones de la transición: clases, nación y Estado de Nicaragua", en *Estado y clases sociales en Nicaragua*, ANIGS/CIERA, Managua.
- (1982a), "Educación en la revolución" en *Cuadernos de Investigación Educativa*, Instituto Politécnico Nacional, 6, México.